

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésimo Cuarta Reunión del Comité de Expertos
Del 8 al 12 de septiembre de 2014
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.419/14 rev. 4
12 septiembre 2014
Original: español

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 12 de septiembre de 2014)

SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en San Vicente y las Granadinas del artículo III, párrafo 9º, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionado por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a San Vicente y las Granadinas en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario; la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil; la información recabada por la Secretaría Técnica del Comité; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 22 y el 24 de abril de 2014 por los miembros del Subgrupo de Análisis, integrado por representantes de Panamá y Saint Kitts y Nevis, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por San Vicente y las Granadinas y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones profesionales sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado e igualmente la información recibida se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de San Vicente y las Granadinas analizados en este informe son: la Procuraduría General (OAG), la Dirección de Auditoría (DOA), la Oficina del Fiscal General (DPP) y el Departamento de las Comisiones de Servicio de la Comisión del Servicio Público (SCD).

Algunas de las recomendaciones formuladas a San Vicente y las Granadinas, para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Con respecto a la OAG, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional tendientes a facilitar y garantizar que las entidades públicas cumplan con la obligación legal de solicitar en tiempo y forma asesoría jurídica a la OAG sobre todo en los asuntos que involucren actos de corrupción; impulsar la elaboración de proyectos de ley en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tales como los relacionados con la integridad en el servicio público, así como desarrollar políticas y/o campañas por parte de la OAG que permitan a los servidores públicos y a la población en general formarse una actitud preventiva que garantice la transparencia y evitar los actos de corrupción.

En relación con la DOA, dotarla con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, principalmente las de auditoría y de detección de prácticas corruptas que generen responsabilidad para quienes resultan involucrados en las mismas; adoptar medidas que aseguren el efectivo cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la DOA en sus informes de auditoría por parte de las entidades públicas sujetas a su control; fortalecer los mecanismos de control de la DOA a través del efectivo y puntual cumplimiento de lo dispuesto en la sección 22.1 de la Ley de Auditoría; así como adoptar mecanismos de coordinación y cooperación que permitan a la DOA remitir oportunamente al DPP, a la Real Fuerza Policial y/o a la Unidad de Inteligencia Financiera, según corresponda, los antecedentes que, en razón de las auditorías que la DOA realiza, indicios de prácticas corruptas.

En lo atinente al DPP, adoptar las medidas necesarias para concluir la efectiva implementación del Servicio Nacional de Persecución Penal tendiente a fortalecer, entre otros aspectos, las facultades de supervisión del DPP sobre los procedimientos conducidos por los fiscales policiales; implementar mecanismos de coordinación entre el DPP, la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas, la OAG y la Unidad de Inteligencia Financiera, tendientes a establecer procedimientos y/o lineamientos efectivos y oportunos de intercambio de información y asesoría jurídica para el adecuado enjuiciamiento de los procesos penales relacionados con actos de corrupción; así como elaborar y publicar información estadística relativa al cumplimiento de sus funciones.

En lo concerniente al SCD, considerar la actualización de las normas que rigen al SCD, en especial las Órdenes del Servicio Civil de la Función Pública de San Vicente y las Granadinas (*Civil Service Orders for the Public Service of Saint Vincent and the Grenadines*), que fueron expedidas con anterioridad a la Constitución de 1979, adecuándolas a los estándares actuales necesarios para un correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; promover y regular la denuncia ciudadana sobre los actos de corrupción en la función pública; así como establecer mecanismos eficientes y efectivos de coordinación interinstitucional que faciliten y garanticen que los Secretarios Permanentes, Jefes de Departamento o quienes tengan la responsabilidad de hacerlo, suministren oportunamente al SCD la información que éste requiere para el cumplimiento de sus funciones de control disciplinario y administración de personal en la administración pública.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a San Vicente y las Granadinas en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por San Vicente y las Granadinas en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuáles requerían atención adicional; cuáles se replanteaban; y cuáles ya no tenían vigencia, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Algunas de las recomendaciones formuladas a San Vicente y las Granadinas en la Primera Ronda que quedan vigentes apuntan a propósitos, tales como fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, actualizar los sistemas de control y uso de los recursos dentro de la gestión pública, establecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad, así como adoptar, a la brevedad, las medidas necesarias para la promulgación y plena vigencia de la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN SAN VICENTE Y LAS
GRANADINAS DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA
SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA^{1/}**

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] En el presente informe se hará referencia, en primer lugar, a la implementación en San Vicente y las Granadinas de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante “la Convención”) seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda. La disposición seleccionada es la prevista en el párrafo 9º del artículo III de la Convención, relativa a los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, se hará referencia a las buenas prácticas que el Estado analizado deseó voluntariamente dar a conocer en relación con los órganos de control superior objeto de análisis del presente informe.

[3] En tercer lugar, conforme a lo acordado por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, inciso a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, este informe versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a San Vicente y las Granadinas por el Comité en el Informe de la Primera Ronda y que hayan sido consideradas como objeto de atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/vct.htm

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, San Vicente y las Granadinas ratificó la Convención el 28 de mayo de 2001 y depositó el respectivo instrumento de ratificación el 5 de junio del mismo año.

[5] Asimismo, San Vicente y las Granadinas suscribió la Declaración sobre el MESICIC el 4 de junio de 2002.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de San Vicente y las Granadinas

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de San Vicente y las Granadinas en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Procuraduría General, la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 12 de septiembre de 2014, en el marco de su Vigésimo Cuarta Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 8 al 12 de septiembre de 2014.

o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. San Vicente y las Granadinas envió, junto con su respuesta, las disposiciones y documentos que estimó pertinentes, disponibles en: www.oas.org/juridico/english/mesicic4_svg.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*^{2/}, la cual se realizó del 22 al 24 de abril de 2014, por parte de los representantes de la República de Panamá y Saint Kitts y Nevis, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada *Metodología*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por San Vicente y las Granadinas hasta el 24 de abril de 2014, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría Técnica y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_docs_sp.htm

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores

[9] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, documentos de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34, inciso b), del Reglamento del Comité.

[10] No obstante, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita *in situ* que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] San Vicente y las Granadinas cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas

2. Disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

corruptas, entre los que se destacan: la Procuraduría General, la Dirección de Auditoría, la Oficina del Fiscal General y el Departamento de las Comisiones de Servicio de la Comisión del Servicio Público.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por San Vicente y las Granadinas que serán analizados en el presente informe.

[13]– Procuraduría General (*Office of the Attorney General*) (en adelante “OAG”, por sus siglas en inglés) es un organismo público cuya existencia está prevista constitucionalmente en los artículos 63 y 80 de la Constitución^{3/}. Los objetivos de la OAG son brindar servicios legales de alta calidad, oportunos e integrales al gobierno, así como a sus entidades conexas, colaborar con el mismo para consolidar una sociedad justa y respetuosa de la ley, con un sistema de justicia accesible, imparcial y eficiente, así como promover el respeto de los derechos y libertades, la ley y la Constitución.

[14]– Dirección de Auditoría (*Director of Audit*) (en adelante “DOA”, por sus siglas en inglés) es un organismo público cuya existencia está prevista constitucionalmente en la sección 75 de la Constitución. El objetivo de la DOA es examinar la contabilidad del gobierno central, el gobierno local y las empresas estatales para cerciorarse de que los recursos que provee el Parlamento se empleen para los fines previstos, con la debida atención a los principios de economía, eficiencia y eficacia.

[15]– Oficina del Fiscal General (*Office of the Director of Public Prosecutions*) (en adelante “DPP”, por sus siglas en inglés) es un organismo público cuya existencia está prevista constitucionalmente en los artículos 64 y 81 de la Constitución. El objetivo del DPP es contribuir a la promoción de las más altas normas de la jurisprudencia penal en San Vicente y las Granadinas y representar eficazmente a la Corona en todo procedimiento penal, ya sea por medio de litigios o en otras formas.

[16]– Departamento de las Comisiones de Servicio (*Service Commissions Department*) (en adelante “SCD”, por sus siglas en inglés) es un departamento autónomo y opera como secretaría de las Comisiones de Servicio. Consta de dos divisiones: la División de Personal y la División de Capacitación. La responsabilidad principal de la División de Personal es apoyar y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones normativas del servicio público tal como se consagran en las Órdenes del Servicio Civil. Por su parte, la División de Capacitación tiene bajo su responsabilidad la asignación y la oferta de oportunidades de capacitación al público y a personas empleadas en el servicio público.

1. PROCURADURÍA GENERAL

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[17] La OAG cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] La OAG es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Jurídicos y su base constitucional es la sección 80 de la Constitución. Tiene como propósito proveer un mecanismo que asegure la operación eficiente y sin problemas del sistema legal en San Vicente y las Granadinas. Sus metas y objetivos son: mejorar la calidad de los servicios que ofrece a sus clientes internos y externos; mejorar más la respuesta oportuna y eficiente a las solicitudes de asesoría jurídica; continuar actualizando anualmente las leyes de San Vicente y las Granadinas; y cerciorarse de que el país se mantenga al día en su participación en tratados regionales e internacionales suministrando los

3. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_const.pdf

proyectos de adhesión e instrumentos de ratificación pertinentes y trabajando en estrecho contacto con el Ministerio de Asuntos Extranjeros, Comercio Exterior y Asuntos del Consumidor.

[19] La OAG también vela por que el sistema de justicia, el Departamento de Registro, el Departamento de Comercio y Propiedad Intelectual y la Unidad de Inteligencia Financiera de San Vicente y las Granadinas funcionen con eficiencia y eficacia, no sólo como entidades individuales, sino colectivamente. Como principal asesor jurídico del gobierno, de acuerdo con la sección 63 de la Constitución, la OAG tiene la responsabilidad de brindar asesoría a los distintos departamentos del gobierno que no tienen su propio departamento legal o equipo de abogados para prestar asesoría jurídica. Generalmente esta asesoría jurídica se refiere a aquellos casos en que existen dudas sobre si son legales o constitucionalmente correctas las acciones administrativas o leyes propuestas; cuando es necesario interpretar y ejecutar obligaciones nacionales, regionales e internacionales; cuando surge un asunto que plantea consideraciones jurídicas nuevas y cuando es necesario negociar y supervisar acuerdos entre el gobierno y un tercero. Además los abogados que trabajan en la OAG representan al Procurador General ante los tribunales en asuntos promovidos contra el Gobierno o instituidos por éste.

[20] La OAG está dividida en dos áreas: el Departamento Legal y el Personal Administrativo. El Departamento Legal está compuesto por el Procurador General, el Abogado General, el Abogado Principal de la Corona, los Abogados de la Corona y el Departamento de Formulación Legislativa. La estructura de Personal Administrativo incluye un Secretario Adjunto, un Director Ejecutivo, un Asistente Bibliotecario Principal y el equipo de apoyo administrativo.

[21] Uno de los principales motores de la OAG es el Departamento de Formulación Legislativa. Este Departamento opera bajo la dirección del Procurador General, que recibe sus instrucciones del Primer Ministro en su capacidad como Primer Ministro y Ministro de Asuntos Jurídicos. El Departamento es responsable de suministrar el servicio eficiente de formulación legislativa, incluyendo la asesoría legislativa conexas al Gobierno de San Vicente y las Granadinas.

[22] Una parte integral del personal de la OAG son los Abogados de la Corona, que trabajan dentro del Ministerio de Asuntos Jurídicos. Como agentes que actúan en nombre del Procurador General, los Abogados de la Corona comparten la independencia que tiene el Procurador General de influencias políticas partidistas, pero en sí no son independientes de la dirección del Procurador General. Durante la visita *in situ*, los representantes de la OAG señalaron que debido al número de casos que ocupan los tribunales en San Vicente y las Granadinas anualmente, sería imprudente y poco práctico que el Procurador General se involucrara personalmente en cada uno de los casos que se presentan de manera regular ante la Procuraduría. Se ha vuelto práctica común que el Procurador General les otorgue amplias facultades discrecionales a sus Abogados de la Corona, quienes actúan a su nombre.

[23] Como representantes del servicio público, el papel de los Abogados de la Corona requiere que sus acciones sean, justas, imparciales y moderadas, sin mostrar indicios de partidismo.

[24] Además de sus funciones de representación, en lo que respecta a la manera en que la OAG brinda asesorías para el correcto funcionamiento del aparato público, la Procuradora General señaló que las mismas son, por lo general, aplicadas y cumplidas por los Ministerios e instituciones públicas involucradas en la asesoría correspondiente. Específicamente, tratándose de asesorías que afecten los intereses de funcionarios públicos que hayan sido objeto de denuncias de actos impropios o indisciplina, durante la visita *in situ*, la Procuradora General hizo hincapié en que los procedimientos

disciplinarios contra ellos podrían ser incoados ante la Comisión del Servicio Público^{4/} (en adelante PSC, por sus siglas en inglés).

[25] Con respecto a la manera en que se selecciona a sus altos funcionarios, la sección 80.1 de la Constitución prevé el nombramiento de una persona para que ocupe el puesto de Procurador General permanente o temporalmente siempre que exista como cargo público. La sección 63.5 dispone que el Procurador General puede ser separado de su puesto por el Gobernador General, actuando de conformidad con la asesoría de la Comisión de Servicios Judiciales y Legales^{5/} (*Judicial and Legal Services Commission*) (en adelante JLSC, por sus siglas en inglés). Cabe señalar que la sección 80.2 especifica que antes de proporcionar asesoría con respecto al nombramiento de cualquier persona para ocupar temporal o permanentemente el puesto de Procurador General, la JLSC consultará con el Primer Ministro.

[26] En relación con la manera en que se identifican los recursos humanos necesarios para sus operaciones, la OAG tiene dos categorías de personal: (a) funcionarios jurídicos y (b) personal administrativo. Con respecto a los funcionarios jurídicos, según la sección 83 de la Constitución, la potestad de designarlos y destituirlos y de ejercer el control disciplinario sobre los mismos reside en el Gobernador General, actuando de conformidad con la asesoría de la JLSC y de acuerdo con las disposiciones aplicables del Reglamento de la JLSC de 1967^{6/}.

[27] En lo relativo al personal administrativo de la OAG, según la sección 78 de la Constitución, la PSC es responsable de sus nombramientos, promociones, transferencias, confirmación de nombramientos, así como de su remoción y el ejercicio del control disciplinario sobre ellos de conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento de la PSC^{7/} (*Public Service Commission Regulations*) y las Órdenes del Servicio Civil de San Vicente y las Granadinas^{8/}.

[28] En cuanto a la existencia de manuales u otros documentos que describan las funciones del personal a su servicio, durante la realización de la visita *in situ*, la representación de la OAG proporcionó, como ejemplo, algunas descripciones de puestos (*job descriptions*)^{9/} de ciertos cargos legales y administrativos en la estructura de la OAG que muestran las responsabilidades de cada uno de ellos. Asimismo, en materia de capacitación, la representación de la OAG señaló que a pesar de no contar en su presupuesto con una asignación suficiente de recursos en este rubro, viene realizando

4. La sección 77 de la Constitución dispone el establecimiento de la Comisión del Servicio Público para San Vicente y las Granadinas. Esta Comisión es un órgano independiente designado por el Gobernador General, actuando de conformidad con la asesoría el Primer Ministro.

5. La Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos se estableció con base en la Sección 18 del Precepto No. 223 de 1967 de la Corte Suprema del Caribe Oriental. La Corte Suprema del Caribe Oriental es el tribunal judicial de más alto orden en el país analizado y su jurisdicción cubre, además de San Vicente y las Granadinas, a otros cinco estados independientes (Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Kitts y Nevis y Santa Lucía) y tres Territorios Británicos de Ultramar (Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat), puesto que no son estados independientes que puedan ser parte de la Convención. Esta Corte inició operaciones en 1967 en sustitución de la Corte Suprema de los Estados Asociados de las Indias Occidentales y está formada por 19 miembros presididos por el Presidente de la Corte. Los nombramientos judiciales, excepto el de Presidente de la Corte, quien es nombrado por Su Majestad, corren a cargo de la Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos, establecida de conformidad con la Sección 18 aludida arriba. La Corte Suprema del Caribe Oriental tiene dos divisiones: la Corte Superior de Justicia y la Corte de Apelaciones. La Corte Superior de Justicia tiene competencia sobre todos los asuntos civiles y penales sobre los cuales no tienen jurisdicción las cortes de magistrados. La Corte de último recurso es el Comité Judicial del Consejo Privado de su Majestad en Londres.

6. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_jud_leg_scr.pdf

7. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_psc_reg.pdf

8. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_civ_soc_ord_pub_serv.pdf

9. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_agc_job_desc.pdf

esfuerzos para que, dependiendo de la materia, sus funcionarios puedan participar en cursos y/o talleres de capacitación que se imparten principalmente en otros Estados insulares de la Región.

[29] Con respecto a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, en el marco de la visita *in situ*, la representación de la OAG puso de presente la puesta en marcha del “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social”^{10/} para el periodo 2013-2025 del Gobierno de San Vicente y las Granadinas, el cual incluye como una de las cinco metas estratégicas allí previstas, promover el buen gobierno e incrementar la efectividad de la administración pública, lo cual implica, señaló, mejorar la democracia participativa, la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos a través, entre otras tareas, del mejoramiento del marco jurídico que rige la administración pública, responsabilidad, esta última, que recae en el ámbito de la OAG. Sumado a lo anterior, la representación de la OAG, con ocasión de la visita *in situ*, suministró igualmente un ejemplar de su “Plan Corporativo” (*Corporate Plan*) 2014-2016^{11/}, documento que forma parte del ciclo presupuestario de las entidades públicas del Estado analizado, en el que se identifican las áreas que, a juicio de la OAG, debiesen ser fortalecidas a través de la dotación de más recursos. Asimismo, la representación de la OAG comentó sobre la puesta en marcha de un proyecto capital a ejecutarse en el periodo 2014-2016 a través del cual esta institución contará con una nueva sede.

[30] En cuanto a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, en el marco de la visita *in situ*, la representación de la OAG hizo referencia, además de la adquisición de nuevos equipos de cómputo, al proyecto que viene desarrollando para digitalizar y hacer públicas en los sitios oficiales en Internet de las entidades gubernamentales que correspondan, leyes y demás instrumentos jurídicos vigentes del Estado analizado. Asimismo, la representación de la OAG informó acerca del proyecto de cooperación técnica que viene ejecutando para la modernización de la legislación y plataforma tecnológica del sitio oficial de la Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual (*Commerce and Intellectual Property Office*) (en adelante “CIPO”, por sus siglas en inglés) disponible en: www.gov.vc/cipo

[31] En este orden de ideas, con relación a la manera en la que suministra información a los ciudadanos, la OAG cuenta con una sección en el portal oficial en Internet del Gobierno de San Vicente y las Granadinas disponible en www.legal.gov.vc, en la que se da a conocer, entre otros aspectos, sus objetivos, funciones y puntos de contacto.

[32] Sobre la manera que se garantizan los recursos presupuestales, la OAG, al igual que las demás dependencias y órganos que conforman la administración pública del Estado analizado, se rige por las disposiciones aplicables del capítulo V constitucional y las leyes presupuestarias anuales (*Appropriation Acts*) del ejercicio fiscal que corresponda.

[33] Finalmente, en relación con los mecanismos de rendición de cuentas, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la OAG se refirió nuevamente a la elaboración de sus “Planes Corporativos” que, como se dijo con antelación, deben elaborarse como parte del ciclo presupuestario y en los cuales se informa, en este caso al Ministro de Asuntos Legales, los objetivos y metas cumplidas en el ejercicio que corresponda. Este documento, se señaló, no es de carácter público sino que constituye un insumo para la elaboración y determinación del presupuesto de la OAG.

10. Véase: http://finance.gov.vc/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=193

11. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_agc_corp_plan.pdf

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[34] La OAG cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[35] En primer lugar y con relación al régimen de responsabilidades de los recursos humanos señalado en la sección anterior, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, toma nota de la dificultad puesta de presente por la representación de la OAG con ocasión de la visita *in situ* en cuanto a las demoras que pudieran presentarse en procedimientos disciplinarios que eventualmente se instauren en relación con sus funcionarios legales, teniendo en cuenta que dichos procedimientos deben interponerse ante la JLSC con sede en Santa Lucía.

[36] Para evitar esta situación que podría llevar a que un funcionario legal sujeto a un procedimiento disciplinario continuara recibiendo emolumentos por parte del Estado hasta en tanto no se resuelva su situación, la Procuradora General señaló que los funcionarios legales suelen ser empleados con carácter contractual, y que sus contratos permiten la destitución por comisión de actos de improbidad y mal desempeño del cargo, sin que para ello el Comité haya identificado si el funcionario legal será seleccionado por concurso de méritos, si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos, o bien la existencia de criterios objetivos que determinen cuando el funcionario legal incurre en conducta inapropiada o realiza un mal desempeño del cargo.

[37] Con relación a lo anterior, el Comité no formulará recomendaciones sino que reitera su decisión contenida en el Informe de San Vicente y las Granadinas en el marco de la Segunda Ronda^{12/} sobre la improcedencia de pronunciarse respecto a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos descritos en la sección 83 de la Constitución, teniendo en cuenta que su nombramiento y régimen disciplinario recae en el ámbito de la JLSC, órgano de jurisdicción supranacional establecido de conformidad con la sección 18 de la Orden No. 1967 de la Corte Suprema del Caribe Oriental.

[38] Empero, tratándose de los funcionarios administrativos al interior de la OAG, si bien los sistemas para la contratación de funcionarios públicos a que se refiere el artículo III, párrafo 5°, de la Convención fueron materia de análisis de la Segunda Ronda, el Comité tampoco formulará recomendaciones sobre el particular, mas reitera sus observaciones contenidas en el Informe de dicha Ronda^{13/} sobre la necesidad de que el Estado analizado considere continuar con la tarea de fortalecer, con base en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención, los sistemas y procesos de selección de servidores públicos administrativos en la OAG.

[39] En segundo lugar y no obstante lo anterior, el Comité reconoce la existencia de las descripciones de puestos de los cargos legales y administrativos que le fueron suministradas con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, no identificó la existencia de procedimientos documentados sobre el desarrollo de las tareas que desempeñan el personal legal y administrativo a su servicio. En este sentido, el Comité estima que sería útil para el Estado analizado contar con este tipo de documentos teniendo en cuenta la especificidad de las responsabilidades que debe cumplir dicho personal. (Véase recomendación 1.4.1. del capítulo II de este informe).

12. Véase el “Informe relativo a la implementación en San Vicente y las Granadinas de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, pp. 4 y 5, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_vct_sp.pdf

13. *Ibíd.*, pp. 2 a 5, 10 y 11.

[40] En materia de capacitación, como quedó señalado en la sección anterior, la OAG cuenta con un rubro presupuestario destinado a este aspecto. Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de este órgano de control manifestó que tales recursos son insuficientes para asegurar la participación de su personal en eventos de capacitación y entrenamiento que generalmente se imparten en el extranjero debido a la especificidad de la capacitación que éste requiere. En este sentido, el Comité releva la importancia de la capacitación como medio óptimo para fortalecer los conocimientos, habilidades y aptitudes que se requieren para lograr el adecuado desempeño de las funciones públicas y, en este sentido, formulará una recomendación. (Véase recomendación 1.4.2. del capítulo II de este informe).

[41] En tercer lugar, con base en la información suministrada por el Estado analizado con ocasión de la visita *in situ*, el Comité reconoce los avances alcanzados por la OAG en cuanto al proyecto que viene ejecutando de digitalización y publicación en Internet de determinadas leyes y otros instrumentos jurídicos vigentes, así como la reciente adquisición de nuevos equipos de cómputo. No obstante, el Comité, teniendo en cuenta la utilidad que reviste la tecnología para facilitar el desarrollo de las labores que cumplen los órganos de control, estima conveniente que la OAG cuente con sistemas informáticos y tecnologías modernas, tales como la plataforma informática de reciente implementación en el ámbito de la CIPO, que le permita, por ejemplo, crear y mantener actualizadas bases de datos sobre sus decisiones, así como para facilitar y hacer más expeditas las acciones de coordinación y cooperación interinstitucionales para recibir y brindar oportunamente la asesoría legal que le compete. El Comité formulará una recomendación en este sentido. (Véase recomendación 1.4.3. del capítulo II de este informe).

[42] El Comité reconoce igualmente la existencia de la sección de la OAG en el portal oficial en Internet del Gobierno de San Vicente y las Granadinas que brinda información acerca de sus objetivos y funciones. Sin embargo, en aras de estimular la participación de la sociedad en la gestión pública, cree también conveniente que el Estado analizado considere incluir en la citada sección, información que permita dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante la OAG. (Véase recomendación 1.4.4. del capítulo II de este informe).

[43] En cuarto lugar, si bien la representación de la OAG manifestó en el marco de la visita *in situ* tener una asignación presupuestaria adecuada para el cumplimiento de sus funciones, salvo en el rubro de capacitación al que ya se ha hecho referencia, puso de presente que el cargo de “Abogado General” (*Solicitor General*) – segunda posición en grado de jerarquía dentro de su estructura orgánica – se ha mantenido vacante por un periodo considerable debido a varios aspectos, entre los que el Estado analizado señaló el salario previsto para ese cargo en relación con las calificaciones, responsabilidades y obligaciones que debe cumplir la persona que ocupe dicha posición. Esta situación, se dijo, ha hecho que la Procuradora General asuma en cierta medida las funciones y deberes que son propios del *Solicitor General*, lo cual, estima el Comité, podría ir en detrimento del cabal y adecuado funcionamiento de la OAG de perdurar esta situación. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 1.4.5. del capítulo II de este informe).

[44] En quinto lugar, el Comité reconoce la atribución conferida a la OAG como única entidad responsable de brindar asesoría jurídica al Gobierno Central, teniendo las instituciones que lo integran la obligación legal de solicitar en tiempo y forma tal asesoría sobre todo en asuntos que involucren actos de corrupción. Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la OAG puso de presente como dificultad para el cumplimiento de dicha atribución, la ausencia de mecanismos de coordinación interinstitucional tendientes a facilitar y garantizar que las entidades públicas cumplan

con esta obligación y soliciten oportunamente ante la OAG la asesoría jurídica correspondiente, y evitar con ello una errónea interpretación y/o aplicación de la ley principalmente en los asuntos que involucren la comisión de prácticas corruptas. Con base en lo anterior, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 1.4.6. del capítulo II de este informe).

[45] Finalmente, en lo que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité toma nota de la información que sobre el particular suministró el Estado analizado con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que estime pertinentes a modo de establecer, en el marco de la OAG, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de cómo hacer éstos públicos. (Véase recomendación 1.4.7. del capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[46] La respuesta al cuestionario del Estado analizado no proporciona resultados en cuanto al desarrollo de las funciones y responsabilidades de la OAG relacionadas con la prevención de actos de corrupción, principalmente aquella relacionada con supervisar que los servidores públicos desempeñen sus funciones apegadas a la ley. Al respecto, durante la visita *in situ*, la representación de esta institución explicó que sólo la PSC, la Junta de Apelaciones del Servicio Público y/o los tribunales judiciales cuentan con información sobre los procesos instaurados en contra de funcionarios públicos por la comisión de un acto de corrupción o violaciones a la ley en el desempeño de sus funciones.

[47] No obstante lo anterior, en cuanto a la función relativa a la presentación de proyectos de ley, la representación de la OAG manifestó durante la vista *in situ* que, aunque han contribuido en la elaboración de algunos proyectos de ley, entre los cuales se ubica la propuesta de un nuevo proyecto de Ley del Servicio Público (*Public Service Act*), la OAG no ha tenido la oportunidad de continuar impulsando proyectos legislativos en materia de corrupción. El Comité formulará una recomendación tomando en consideración lo anterior. (Véase recomendación 1.4.8. del capítulo II de este informe).

[48] Finalmente y retomando la atribución de la OAG relativa a supervisar que las actuaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones estén apegadas a derecho, el Comité, en aras de coadyuvar con esta atribución, estima conveniente que el Estado analizado considere implementar políticas y/o campañas que permitan tanto a los servidores públicos como a la población en general, formarse una actitud preventiva que garantice la transparencia y evitar los actos de corrupción. (Véase recomendación 1.4.9. del capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[49] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la OAG en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[50] **San Vicente y las Granadinas ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la OAG, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[51] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Adoptar manuales, guías u otro tipo de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas que debe desempeñar el personal legal y administrativo de la OAG. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Dotar a la OAG con los recursos financieros necesarios para asegurar la capacitación periódica de sus funcionarios en relación con las funciones que desempeñan, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Dotar a la OAG con sistemas informáticos y tecnologías modernas que le permita, entre otros aspectos, crear y mantener actualizadas bases de datos sobre sus decisiones, así como para facilitar y hacer más expeditas las acciones de coordinación interinstitucionales para recibir y brindar oportunamente la asesoría legal que le compete. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Actualizar la sección de la OAG en el portal oficial en Internet del Gobierno con información que permita a la ciudadanía conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y orientarla acerca de cómo realizar gestiones ante la OAG. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes para nombrar a la brevedad al “Abogado General” (*Solicitor General*). (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional tendientes a facilitar y garantizar que las entidades públicas cumplan con la obligación legal de solicitar en tiempo y forma asesoría jurídica a la OAG sobre todo en asuntos que involucren actos de corrupción. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la OAG, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.8. Impulsar la elaboración y aprobación de proyectos de ley en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tales como los relacionados con la integridad en el servicio público. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.9. Desarrollar políticas y/o campañas por parte de la OAG que permitan a los servidores públicos y a la población en general formarse una actitud preventiva que garantice la transparencia y evitar los actos de corrupción. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).

2. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[52] La DOA cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[53] La DOA es una oficina independiente y pública cuya existencia está prevista constitucionalmente en la sección 75 de la Constitución. Con respecto a sus objetivos y funciones, la Constitución requiere que la DOA examine la contabilidad del Gobierno Central, Local y las empresas estatales para cerciorarse de que los recursos que provee el Parlamento se empleen para los fines previstos, prestando la debida atención a los principios de economía, eficiencia y eficacia. Se prevé que la DOA informe anualmente sobre la contabilidad, y estos informes constituyen el fundamento de la función del Comité de Contabilidad Pública^{14/}.

[54] La parte III de la Ley de Auditoría de San Vicente y las Granadinas (2005)^{15/}, dispone además, en su sección 10, que el Auditor General – auditor de la contabilidad del gobierno – en tal calidad, lleve a cabo los análisis y averiguaciones que considere necesarios para permitirle rendir los informes que esta Ley requiere. En su análisis y auditoría de la contabilidad del gobierno, la DOA puede realizar las verificaciones que considere necesarias para permitirle formarse una opinión sobre si un ministerio, departamento o servicio ha empleado sus recursos con economía, eficiencia y eficacia. A más tardar seis meses después del fin del ejercicio financiero, la DOA deberá llevar a cabo los análisis y averiguaciones que considere necesarios para permitirle auditar la contabilidad de cada organismo gubernamental para el ejercicio anterior y rendir los informes que exige la Ley de Auditoría.

[55] Según la sección 75.7 de la Constitución, la DOA, en el ejercicio de sus funciones, no está sujeta a la dirección ni al control de ninguna persona o autoridad.

[56] La sección 75.3 de la Constitución establece además que en el desempeño de su trabajo, la DOA, así como cualquier funcionario que ella autorice, tendrá acceso a todos los libros, registros, declaraciones, informes y otros documentos que en su opinión guarden relación con cualquiera de las contabilidades a que se refiere la sección 75.2 constitucional. La sección 19 de la Ley de Auditoría, en su parte IV, extiende más las atribuciones del Auditor General en este respecto. Por ejemplo, en el ejercicio de sus responsabilidades, la DOA tiene derecho, en todo momento razonable y para cualquier propósito relacionado con el descargo de sus responsabilidades a tener acceso a los registros y equipos de procesamiento electrónico de datos propiedad o en uso por arrendamiento del ministerio, departamento u otro servicio; órgano público; ente que recibe dinero del gobierno; corporación propiedad del gobierno o bajo su control; o cualquier otro organismo o entidad. Asimismo, en la realización de un análisis o auditoría o en el descargo de cualquier responsabilidad según la Ley de Auditoría o cualquier otra, la DOA puede, mediante notificación, requerir que cualquier persona comparezca ante ella para presentar pruebas bajo juramento o, cuando la ley lo permite, bajo afirmación, sobre cualquier asunto relacionado con el análisis, auditoría u otra responsabilidad, así como entregar todos los registros relativos al asunto a que se refiere la notificación.

[57] En relación con la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, la Sección 82 de la Constitución prevé que la Directora de Auditoría será designada por el Gobernador General, actuando de conformidad con la asesoría de la PSC, la cual deberá consultar con el Primer Ministro. Esta sección establece asimismo que la Directora de Auditoría deberá dejar su puesto cuando alcance la edad prescrita (55 años) y que puede ser destituida por el Gobernador General solamente por incapacidad para ejercer funciones de su puesto (ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa) o por mala conducta, y que su destitución solamente puede ser acorde con las disposiciones de esta sección.

14. Ver sección 76 de la Constitución, *supra* nota 3.

15. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_aud_act.pdf

[58] En cuanto a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, su nombramiento, remoción, requisitos para acceder a los cargos; así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones, el personal de la DOA está sujeto al régimen general para el funcionariado público del Estado analizado previsto principalmente en las secciones 77 y 78 constitucionales, así como en las disposiciones aplicables del Reglamento de la PSC y en las Órdenes del Servicio Civil de San Vicente y las Granadinas, aludidos todos en la sección 1.1 de este informe en relación con el personal administrativo de la OAG.

[59] En cuanto a la existencia de manuales u otros documentos que describan las funciones del personal a su servicio, durante la realización de la visita *in situ*, la representación de la DOA señaló que cuentan con descripciones de puestos (*job descriptions*), los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión y actualización con el apoyo de la Unidad para la Reforma del Sector Público del Ministerio de Reconciliación, Servicio Público, Trabajo, Información y Asuntos Eclesiásticos. En materia de capacitación, la representación de la DOA señaló que ésta es limitada e insuficiente para las necesidades del personal a su servicio, razón por la cual se han visto en la necesidad de buscar apoyo de organismos regionales e internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, tales como la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y la Organización Caribeña de Instituciones Supremas de Auditoría (CAROSAI, por sus siglas en inglés).

[60] Respecto a la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la DOA señaló que, además de contar con un manual de procedimientos, las auditorías que desarrolla se realizan también de conformidad con las normas internacionales de auditoría para la fiscalización externa pública de la INTOSAI, otras normas y métodos de auditoría generalmente aceptadas y cualesquiera otras leyes y reglamentos locales. No obstante lo anterior, la misma representación de la DOA puso de presente que se encuentran desarrollando una nueva guía de procedimientos tendiente a hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones.

[61] En cuanto a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, la representación de la DOA señaló que, como parte de un plan estratégico quinquenal que se viene desarrollando, la sede de la DOA fue reubicada en el pasado reciente a una nuevo sede que brinda mayores espacios para lograr sus objetivos organizacionales como condiciones de trabajo adecuadas. Asimismo, en relación con la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, la representación de la DOA señaló que se encuentran desarrollando una serie de proyectos informáticos que le permitirán contar con bases de datos sobre información financiera que recibe, procesa y analiza, así como las solicitudes que la misma DOA formula a las dependencias públicas para el cumplimiento de sus atribuciones.

[62] En este mismo orden de ideas, la representación de la DOA hizo alusión a las reformas legislativas sobre la gestión de los recursos financieros del Estado, sus activos y procedimientos de contratación. Entre éstas se refirió a la nueva Ley de Administración de Finanzas (*Finance Administration Act*), así como a un nuevo proyecto de Ley de Auditoría que reforzaría la independencia de la DOA, armonizándola con otras entidades fiscalizadoras superiores miembros de la INTOSAI. Igualmente se hizo alusión de manera breve a la asistencia recibida en 2004 por parte del Programa de Gestión Económica del Caribe Oriental (ECEMP, por sus siglas en inglés).

[63] Sobre la manera en la que se suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, la DOA cuenta con una sección en el portal oficial en Internet del Gobierno de San Vicente y las Granadinas disponible en www.audit.gov.vc, en la que se da a conocer, entre otros aspectos, cierta información sobre sus objetivos, funciones y puntos de contacto, así como el marco legislativo de sus funciones.

[64] En relación con los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio, con ocasión de la visita *in situ*, se informó que la DOA no cuenta con una unidad de auditoría interna. No obstante, tratándose de mecanismos de control externo, la sección 22.1 de la Ley de Auditoría prevé que *“Cada año, un auditor autorizado por la ley para practicar la contabilidad en San Vicente y las Granadinas designado por el Ministro con la aprobación por resolución de la Asamblea, analizará y auditará la contabilidad de la Oficina de Auditoría y preparará un informe.”*

[65] Respecto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, como quedó señalado en la sección 1.1 del capítulo II de este informe en relación con la OAG, la DOA se rige igualmente por lo dispuesto en el capítulo V constitucional y las Leyes Presupuestarias anuales del ejercicio fiscal que corresponda, además de lo dispuesto en la sección 27 de la Ley de Auditoría que señala *“... (2) El Auditor General, a más tardar seis meses antes del inicio de cada ejercicio financiero, le entregará al Comité^{16/}, con respecto a ese ejercicio financiero, las estimaciones de las sumas de dinero que se requerirá que la Legislatura suministre para sufragar los gastos de la Auditoría General en dicho ejercicio financiero; (3) El Comité examinará, sin demora, las estimaciones presentadas de acuerdo con la subsección (2) y, al completar dicho examen, el presidente del Comité le transmitirá las estimaciones al Ministro para su inclusión en las estimaciones anuales.”*

[66] Sobre los mecanismos de coordinación con otros órganos de control o instituciones del Estado, durante la visita *in situ* la representación de la DOA se refirió a aquellos existentes entre la DOA y la oficina del “Contador General” – Director de Contabilidad del Gobierno – para acceder a la información financiera que éste último produce y con ello contribuir al cabal cumplimiento de las funciones de la DOA.

[67] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, en el marco de la visita *in situ*, la DOA se refirió también a la elaboración de los “Planes Corporativos” que, como se dijo con antelación en relación con la OAG, deben elaborarse como parte del ciclo presupuestario.

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[68] La DOA cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[69] En primer lugar, como quedó señalado en la sección inmediata anterior, la DOA, por mandato constitucional, es la entidad responsable de asegurar que los egresos de los fondos asignados por el Parlamento se hayan empleado para los propósitos para los que fueron presupuestados, debiendo

16. El “Comité” se refiere al Comité designado por la Asamblea para los fines de la sección 27 de la Ley de Auditoría.

auditar, por lo menos una vez al año, las cuentas públicas del Estado, así como las de todos los funcionarios y autoridades del Gobierno, a través de las denominadas auditorías de cumplimiento.

[70] Asimismo, con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité reconoce que a partir de la entrada en vigor en 2005 de la actual Ley de Auditoría, el ámbito competencial de la DOA se amplió significativamente a modo de mejorar la rendición de cuentas en la utilización de los fondos públicos y fortalecer su mandato, a modo de que ésta conduzca, no sólo auditorías de cumplimiento, sino también otro tipo de auditorías financieras y de gestión (“*value for money audits*”).

[71] Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la DOA puso de presente que los recursos humanos y financieros con que cuenta actualmente son insuficientes para cumplir a cabalidad las atribuciones que por mandato constitucional y legal le competen. Como ejemplo de ello, la misma representación de la DOA señaló que en razón de esta insuficiencia no le ha sido posible incrementar el número de auditorías que desearía realizar por año, ni tampoco auditar inversiones públicas de gran escala, como la del nuevo Aeropuerto Internacional Argyle, que desde el inicio de su construcción en 2008 no se ha auditado la ejecución de los recursos destinados para ello, teniendo en cuenta que para realizar auditorías de ese género se requieren recursos técnicos, tales como agrimensores especializados en cálculos cuantitativos e ingenieros, así como la capacitación técnica necesaria con la que no cuenta la DOA.

[72] Teniendo en cuenta los anteriores aspectos y la importancia de las funciones y atribuciones propias de la DOA para detectar la comisión de prácticas corruptas, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de asegurar que este órgano de control superior cuente con los recursos necesarios para el adecuado y efectivo cumplimiento de sus objetivos legales y constitucionales. (Véase recomendación 2.4.1. del capítulo II de este informe).

[73] El Comité estima que podría guardar relación con lo anterior, el hecho que durante la visita *in situ* la representación de la DOA señaló también que no se ha dado la debida aplicación a lo dispuesto en la sección 27 de la Ley de Auditoría transcrita en la sección precedente, que refiere al nombramiento por parte del Parlamento de un “Comité” que deberá conocer anualmente las necesidades presupuestarias de la DOA y, sin demora, debiera transmitir las al Ministro responsable de las finanzas para su inclusión en los egresos estimados del año que corresponda.

[74] En segundo lugar, el Comité observa una ausencia de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones que emite la DOA a través de sus informes de auditoría. Al respecto, durante la visita *in situ*, la representación de este órgano de control señaló que tales recomendaciones de por sí no son vinculantes para los ministerios y demás entidades públicas sujetas a su control, pero además, señaló, el Comité de Cuentas Públicas a que se refiere la sección 76 constitucional no se ha venido instituyendo en los términos previstos en dicha sección. Cabe señalar que durante la visita *in situ* los representantes de la DOA mencionaron que habían constatado que algunas de las recomendaciones que habían formulado a los departamentos por ella auditados no habían sido seguidas, lo que en algunos casos hizo que los mismos temas volvieran al departamento. En este sentido, el Comité, teniendo en cuenta la importancia del trabajo que viene llevando a cabo la DOA tanto para la detección de prácticas corruptas como para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, sugiere al Estado analizado que considere adoptar las medidas que se estimen necesarias a modo de asegurar el efectivo cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la DOA en sus informes de auditoría por parte de las entidades públicas sujetas a su control. (Véase recomendación 2.4.2. del capítulo II de este informe).

[75] En tercer lugar y con relación al régimen descrito en la sección anterior sobre la manera en que se determinan los recursos humanos y en que son provistos los mismos, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición y la que obtuvo con ocasión de la visita *in situ*, no logró identificar la existencia de requisitos mínimos de estudios profesionales y experiencia exigibles para quienes deseen acceder a cualquier cargo dentro de la DOA, principalmente de auditores y/o especialistas contables. Al respecto, el Comité reconoce que el régimen general de contratación de servidores públicos en el Estado analizado, que incluye al personal de la DOA, fue detalladamente analizado en el Informe de la Segunda Ronda¹⁷, por lo que no formulará recomendaciones en este sentido, pero reitera aquella contenida en dicho Informe relativa a la necesidad de que San Vicente y las Granadinas considere adoptar disposiciones y criterios claramente definidos que garanticen el acceso al servicio público, en este caso a la DOA, a través de sistemas basados en los principios de publicidad, equidad y eficiencia a que se refiere la Convención.

[76] No obstante lo anterior, el Comité sí formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que se adopten las medidas necesarias a modo de concluir con los procesos de revisión y actualización de las descripciones de puestos de la DOA, así como de elaboración de la nueva guía de procedimientos tendiente a hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones. (Véase recomendación 2.4.3. del capítulo II de este informe).

[77] En cuarto lugar, en materia de capacitación, el Comité reconoce los esfuerzos de la DOA por conseguir el apoyo de organizaciones tales como la INTOSAI y la CAROSAI para proveer a su personal del entrenamiento técnico necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Sin embargo, como quedó señalado en la sección anterior, la representación de la DOA puso de presente en la visita *in situ* que, sin perjuicio del apoyo que reciben de estos organismos, la capacitación de su personal es limitada e insuficiente. En este sentido, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a garantizar que el personal de la DOA, principalmente aquel con funciones de auditoría y contables, cuente con capacitación periódica, en especial, para la detección de prácticas corruptas. (Véase recomendación 2.4.4. del capítulo II de este informe).

[78] En el mismo sentido, el Comité, con base en la información a la que tuvo acceso y la recabada durante la visita *in situ*, reconoce los esfuerzos de la DOA de contar con una plataforma tecnológica e informática que brinde mayor eficiencia, eficacia y prontitud a las labores de auditoría que desarrolla. Al respecto, de nueva cuenta el Comité releva la utilidad de la tecnología como una herramienta para el desarrollo de mecanismos modernos para prevenir y detectar las prácticas corruptas, como lo señala el párrafo 9º del artículo III de la Convención, por lo que estima conveniente que el Estado analizado considere redoblar sus esfuerzos tendientes a fortalecer la plataforma tecnológica de la DOA, a través del desarrollo y promoción de proyectos informáticos, que faciliten, entre otros aspectos, las labores de ésta en materia de prevención y detección de prácticas corruptas. (Véase recomendación 2.4.5. del capítulo II de este informe).

[79] En quinto lugar, en lo que tiene que ver con los mecanismos de control, si bien con ocasión de la visita *in situ* la representación de la DOA puso de presente que carece de una unidad de auditoría interna, igualmente señaló que lo dispuesto en la sección 22.1 de la Ley de Auditoría que prevé el nombramiento cada año de un auditor externo que examine y audite las cuentas de la DOA tampoco se ha aplicado. En este sentido y en aras de promover la transparencia y la probidad de la utilización de los recursos públicos por parte de la DOA, el Comité formulará una recomendación en el sentido

17. Véase *supra* nota 13.

de adoptarse las medidas necesarias para fortalecer los mecanismos de control de este órgano de control. (Véase recomendación 2.4.6. del capítulo II de este informe).

[80] En sexto lugar, si bien como se mencionó en la sección anterior la DOA mantiene relaciones de coordinación y cooperación con la oficina del Contador General para acceder a la información financiera que éste produce, el Comité, con la base en la información que tuvo a su disposición y aquella recabada durante la visita *in situ*, no identificó la existencia de mecanismos de coordinación y cooperación que permitan a la DOA remitir oportunamente al DPP, a la Real Fuerza Policial y/o a la Unidad de Inteligencia Financiera, según corresponda, los antecedentes que, en razón de las auditorías que la DOA realiza, indicios de prácticas corruptas. Lo anterior contribuiría al logro de los propósitos de la Convención, particularmente aquellos relacionados con la obligación de denunciar prácticas corruptas y de desarrollar mecanismos modernos para prevenir y detectar dichas prácticas, previstos en los párrafos 1º y 9º de su artículo III, respectivamente. (Véase recomendación 2.4.7. del capítulo II de este informe).

[81] Finalmente, en lo que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité toma nota de la información suministrada con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la DOA, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 2.4.8. del capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[82] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no proporciona información sobre resultados de la DOA en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con la detección de prácticas corruptas. Lo anterior responde a que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de este órgano de control puso de presente que carece de información estadística sobre el desempeño de sus funciones y atribuciones. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones 2.4.9 y 2.4.10. del capítulo II de este informe).

[83] Asimismo, si bien durante la visita *in situ* la representación de la DOA señaló que cuenta con planes anuales de auditorías, el Comité no tuvo oportunidad de conocer el contenido y alcance de los mismos. En este sentido y en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, tanto de la DOA como de las entidades sujetas a su control, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a publicar, en el sitio web de la DOA, dichos planes, de tal manera que la ciudadanía tenga conocimiento de la labor que viene desempeñando este órgano y las áreas que son objeto de su revisión. (Véase recomendación 2.4.11. del capítulo II de este informe).

[84] Igualmente, el Comité no logró identificar la forma ni medios en que la DOA hace públicos y accesibles a los ciudadanos los informes de auditoría que por mandato constitucional y legal debe presentar anualmente al Parlamento, por lo que, reiterando la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto al manejo de los recursos públicos en el Estado analizado, el Comité formulará una recomendación para que dichos informes sean también publicados en el sitio web de la DOA. (Véase recomendación 2.4.12. del capítulo II de este informe).

[85] Finalmente y teniendo en cuenta que la misión de la DOA es promover la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora de los departamentos y entidades del Gobierno, así como de cerciorarse de que los fondos asignados por el Parlamento se aplican a los fines previstos, el Comité estima conveniente también que San Vicente y las Granadinas considere desarrollar campañas y/o programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público entre los servidores públicos del Estado analizado y la sociedad en general. (Véase recomendación 2.4.13. del capítulo II de este informe).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[86] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la DOA en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[87] San Vicente y las Granadinas ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la DOA, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.

[88] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Dotar a la DOA con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, principalmente las de auditoría y de detección de prácticas corruptas que generen responsabilidad para quienes resultan involucrados en las mismas, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Establecer mecanismos que aseguren el efectivo cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la DOA en sus informes de auditoría por parte de las entidades públicas sujetas a su control. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Concluir con los procesos de revisión y actualización de las descripciones de puestos de la DOA, así como de elaboración de la nueva guía de procedimientos tendiente a hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Adoptar las medidas necesarias que aseguren que el personal al servicio de la DOA, principalmente aquel con funciones de auditoría y contables, cuente con capacitación periódica que permita fortalecer sus capacidades, conocimientos y habilidades para la detección de prácticas corruptas. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Fortalecer la plataforma tecnológica de la DOA, a través del desarrollo y promoción de proyectos informáticos, que faciliten, entre otros aspectos, las labores de ésta en materia de detección de prácticas corruptas. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Fortalecer los mecanismos de control de la DOA a través del efectivo y puntual cumplimiento de lo dispuesto en la sección 22.1 de la Ley de Auditoría. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).

- 2.4.7. Adoptar mecanismos de coordinación y cooperación que permitan a la DOA remitir oportunamente al DPP, a la Real Fuerza Policial y/o a la Unidad de Inteligencia Financiera, según corresponda, los antecedentes que, en razón de las auditorías que la DOA realiza, presenten indicios de prácticas corruptas. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.8. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco de la DOA, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase sección 2.2. del capítulo II de este informe).
- 2.4.9. Elaborar información estadística en relación con los resultados en el desempeño de las funciones de detección de las prácticas corruptas que generan responsabilidad administrativa, civil, y de presunción de responsabilidad penal, a través de la realización de los diferentes tipos de auditoría que adelanta la DOA, que permita determinar, además del número de auditorías finalizadas, cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.10. Elaborar información sobre los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado efectivamente al erario público, en orden a identificar retos en el proceso de cobranza de resarcimientos a favor del Estado y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.11. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía consultar y conocer, a través del portal oficial en Internet del Gobierno, los planes y/o programas anuales de auditorías que desarrolla la DOA. (Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.12. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a la ciudadanía consultar y conocer, a través del portal oficial en Internet del Gobierno, los informes anuales de auditoría que por mandato constitucional y legal le corresponde a la DOA presentar al Parlamento. (Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).
- 2.4.13. Desarrollar, por parte de la DOA, campañas y/o programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público entre los servidores públicos y la sociedad en general. (Ver sección 2.3. del capítulo II de este informe).

3. OFICINA DEL FISCAL GENERAL

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[89] El DPP cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[90] El DPP es una instancia autónoma, independiente y pública. Las secciones 64 y 81 de la Constitución prescriben que debe contribuir a la promoción de las más altas normas de la

jurisprudencia penal y representar eficazmente a la Corona en todos los procedimientos penales, ya sea mediante litigios o por algún otro medio.

[91] Con respecto a sus objetivos y funciones, la sección 64.2 de la Constitución establece que el DPP estará facultado, en cualquier caso en que lo considere deseable, para instituir y llevar cualquier proceso penal contra cualquier persona ante cualquier corte, salvo los tribunales militares, con respecto a cualquier delito que supuestamente hubiere cometido dicha persona; para atraer y continuar cualquier proceso penal de este tipo que haya instituido o esté llevando cualquier otra persona o autoridad; y para suspender —en cualquier etapa anterior al fallo— cualquier proceso penal de este tipo instituido o llevado por él mismo o por cualquier otra persona o autoridad.

[92] La sección 64.4 constitucional otorga al DPP la facultad de atraer y continuar o suspender cualquier proceso penal instituido por cualquier otra persona o autoridad y excluye de dicha facultad a cualquier otra persona o autoridad. La sección 64.5 establece además que los procesos penales incluyen cualquier apelación de cualquier determinación de cualquier corte en un proceso penal o caso, mientras que la sección 64.3 dispone que la función del DPP puede ser ejercida por él mismo personalmente o a través de otras personas que actúen bajo sus instrucciones generales o específicas y de acuerdo con ellas.

[93] En relación con su independencia, la sección 64.6 de la Constitución dispone que en el ejercicio de las funciones que le confieren las secciones 64.2 y 42 constitucionales, el DPP no debe verse sujeto a la dirección ni al control de ninguna otra persona o autoridad.

[94] En cuanto a la manera en la que adopta sus decisiones, con ocasión del visita *in situ*, la representación del DPP suministró un ejemplar del Código para Fiscales de San Vicente y las Granadinas^{18/} (*Code for Prosecutors of Saint Vincent and the Grenadines*), el cual en su capítulo 6 prevé el proceso de toma de decisiones principalmente aquellas relacionadas para dar inicio al proceso penal.

[95] En relación con la manera en que es seleccionado el Fiscal General, la sección 81.1 de la Constitución dispone que su nombramiento recae en el Gobernador General, con asesoría de la JLSC. La sección 81.3 de la Constitución establece que la persona designada para ocupar el cargo de Fiscal General deberá contar con una de las cualificaciones especificadas y haberla tenido durante un período no menor de cinco años. Sujetándose a las disposiciones de las secciones 81.5 y 81.10, el Fiscal General deberá dejar su puesto al cumplir 55 años. No obstante, la JLSC puede permitir que continúe ocupándolo hasta una edad más avanzada, que no deberá exceder de los 65 años. Las secciones 81.6 y 81.7 disponen además que el Director de la Fiscalía puede ser destituido de su cargo solamente por incapacidad de desempeñar las funciones de su puesto —ya sea por enfermedad física o mental o por cualquier otra causa de cualquier índole— o por conductas indebidas. Los procedimientos de destitución se detallan en las secciones 81.8 y 81.9 de la Constitución.

[96] En relación con la manera en que se identifican los recursos humanos necesarios para sus operaciones, el DPP, al igual que la OAG, tiene dos categorías de personal: (a) funcionarios jurídicos (fiscales) y (b) personal administrativo. Según la sección 83 de la Constitución, el proceso de nombramiento, el ejercicio del control disciplinario y la remoción de los funcionarios jurídicos son responsabilidad del Gobernador General, con la asesoría la JLSC y de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la JLSC correspondientes.

18. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_cod_pros.pdf

[97] Según la sección 78 de la Constitución, la PSC es responsable de los nombramientos, promociones, transferencias, confirmación de nombramientos y remoción del personal administrativo del DPP, así como de ejercer control disciplinario sobre ellos, de acuerdo con las disposiciones aplicables del Reglamento de la PSC y las Órdenes del Servicio Civil.

[98] En materia de capacitación, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de presente que en razón de la insuficiencia de recursos destinados a este rubro en su presupuesto, el DPP no cuenta con programas permanentes y/o periódicos de capacitación para el personal a su servicio. No obstante, a raíz de ofertas que anualmente recibe de otros Estados y/u organismos internacionales, su personal ha tenido la oportunidad de recibir cierto tipo de capacitación principalmente relacionada con la persecución de delitos referidos al narcotráfico y otras modalidades de delincuencia organizada transnacional.

[99] En lo que tiene que ver con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, durante la visita *in situ*, la representación del DPP suministró un ejemplar físico de su “Manual de Orientación para la Preparación de Expedientes”^{19/} (*Manual of Guidance for Preparation of Case Files*), mismo que hace referencia también al Código para Fiscales de San Vicente y las Granadinas, aludido con anterioridad, así como a los documentos *Points to Prove* (P2P)^{20/}, la “Carta de Testigos” (*Witness Charter*)^{21/} y la Guía de Investigación y Persecución de Delitos Graves de Delincuencia Organizada (*Guide to Investigation and Prosecution of Serious Organised Crime*)^{22/}.

[100] Con relación a la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores, la representación del DPP, con ocasión de la visita *in situ*, si bien señaló que utiliza sistemas electrónicos establecidos para un intercambio más expedito de información con la Corte Suprema del Caribe Oriental, en la actualidad, dijo, se encuentra desarrollando proyectos informáticos tendientes a facilitar el archivo electrónico de expedientes y su estado procesal, así como para el intercambio de información entre los diferentes actores que integran el sistema de justicia criminal del Estado analizado.

[101] En cuanto a la manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos, el Comité denota una sección del DPP en el portal oficial en Internet del Gobierno de San Vicente y las Granadinas^{23/}, el cual contiene información breve relacionada con sus objetivos y puntos de contacto. No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de presente el reciente lanzamiento de dos importantes documentos que guardan relación con estos aspectos. El primero de ellos, es el Protocolo de Medios de Comunicación del Servicio de Persecución Penal Nacional de San Vicente y las Granadinas^{24/} (*National Prosecution Service of Saint Vincent and the Grenadines Media*

19. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_man_guid_prep_case_file.pdf

20. Este documento debe ser consultado por todas las agencias policiales a fin de que comprendan el respaldo probatorio que se requiere para satisfacer la etapa *evidencial* del Código para Fiscales.

21. Este documento establece las normas básicas para la atención de los testigos.

22. Este compendio de cuatro partes está diseñado para auxiliar tanto a los funcionarios de las fuerzas policiales como a los fiscales en materia de procedimiento y derecho. La primera parte suministra orientación jurídica sobre asuntos comunes que puedan surgir durante la investigación y el enjuiciamiento de delitos de narcotráfico y trata, así como de delincuencia cibernética y lavado de activos; la segunda parte provee orientación sobre interdictos; la tercera sobre incautaciones y la cuarta sobre acciones civiles de recuperación.

23. Véase: <http://goo.gl/Ho1VSn>

24. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_natl_prosec_serv_med_prot.pdf

Protocol), el cual tiene como objetivo “...suministrar principios rectores para un proceso de investigación y enjuiciamiento abierto y con rendición de cuentas, asegurándose de que los medios de comunicación tengan acceso a los materiales pertinentes a la primera oportunidad posible.” El segundo es la Política de Identificación a través de Redes Sociales^{25/} (*Social Media Identification Policy*), cuyo propósito es “detallar el procedimiento correcto para la policía y la fiscalía cuando un testigo identifica a un sospechoso a través de los medios de comunicación social.”

[102] Sumado a lo anterior, la representación del DPP informó también acerca de los trabajos que viene desarrollando para el lanzamiento de un sitio web oficial del Servicio Nacional de Persecución Penal (*National Prosecution Service*) de San Vicente y las Granadinas en el futuro próximo. Asimismo, hizo referencia a su participación en programas de radio y televisión cuando estime que hay necesidad de aclarar e informar a la ciudadanía sobre procesos que por sus características así lo requieran. La representación del DPP también se refirió a la ejecución que, junto con la Policía, viene implementando del programa “*No Witness No Justice*” dirigido a jóvenes estudiantes para brindarles información y consejos prácticos sobre el sistema de justicia y el papel crítico de los testigos en los procesos penales.

[103] En relación con los mecanismos de control interno, durante la visita *in situ*, la representación del DPP informó que es un órgano autónomo con sus propios mecanismos de contabilidad mas no cuenta con unidad de auditoría interna. Asimismo, en cuanto a eventuales reclamos, quejas o denuncias que pudieran presentarse relacionadas con el desempeño del personal legal a su servicio, la representación del DPP se refirió, sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios previstos ante la PSC y la JLSC, al procedimiento que, en el ámbito del Colegio de Abogados de San Vicente y las Granadinas, está previsto por violaciones al Código de Ética adoptado de conformidad con la sección 18 de la Ley de Abogacía (*Legal Profession Act*).

[104] Respecto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, como quedó señalado en las secciones 1.1 y 2.1 del capítulo II de este informe en relación con la OAG y la DOA, el DPP se rige igualmente por lo dispuesto en el capítulo V constitucional y las leyes presupuestarias anuales del ejercicio fiscal que corresponda.

[105] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, en el marco de la visita *in situ*, la representación del DPP señaló que no cuenta con los mismos, señalado, como mecanismo más cercano, la elaboración de los “Planes Corporativos” que, como se dijo con antelación en relación con la OAG y la DOA, deben elaborarse como parte del ciclo presupuestario.

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[106] El DPP cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[107] En primer lugar, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de presente los esfuerzos en curso en el Estado analizado para implementar integralmente el Servicio Nacional de Persecución Penal como existe en otros Estados del Caribe Oriental. Uno de los aspectos más importantes que se persiguen con la puesta en marcha de dicho Servicio, señaló, será controlar bajo el

25. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_soc_med_id_pol.pdf

‘paraguas’ del DPP los procedimientos actualmente conducidos por fiscales policiales, quienes operan en el ámbito de la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas y, en consecuencia, el DPP no puede garantizar una supervisión efectiva de la labor que éstos desempeñan y brindarles la dirección, orientación y asistencia necesarias para el enjuiciamiento de los casos.

[108] Al respecto, el Comité considera que la implementación del Servicio Nacional de Persecución Penal constituye un paso positivo del Estado analizado para hacer más eficientes y efectivos los procedimientos de enjuiciamiento penal, principalmente aquellos relacionados con actos de corrupción, y en este sentido formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.1. del capítulo II de este informe).

[109] En segundo lugar, en lo que respecta a la manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, con ocasión de la visita *in situ* y sin perjuicio del régimen descrito en la sección anterior, la representación del DPP señaló que uno de los principales mecanismos con que cuenta para ocupar las vacantes a posiciones legales que se llegaran a presentar, es un programa de pasantías que viene implementándose en los últimos años, y a través del programa de Educación y Capacitación de Apoyo (SET, por sus siglas en inglés), que es una reciente iniciativa del Estado centrada en la formación de jóvenes y la preparación de personas para el paso siguiente de su trayectoria académica, sin que para ello el Comité haya logrado identificar la existencia de criterios o requisitos objetivos para postular a dicho programa.

[110] No obstante lo anterior, el Comité se reserva el derecho a formular recomendaciones con base en su decisión contenida en el Informe de San Vicente y las Granadinas en el marco de la Segunda Ronda^{26/} sobre la improcedencia de pronunciarse respecto a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos descritos en la sección 83 de la Constitución, teniendo en cuenta que su nombramiento recae en el ámbito de la JLSC de la Corte Suprema del Caribe Oriental. Sin embargo, en lo que resulte procedente, reitera sus observaciones contenidas en dicho Informe sobre la importancia que el Estado analizado considere continuar con la tarea de fortalecer, con base en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención, los sistemas y procesos de selección de funcionarios públicos, en este caso, al servicio del DPP.

[111] En tercer lugar, si bien la representación del DPP suministró en el marco de la visita *in situ* un ejemplar del Código para Fiscales de San Vicente y las Granadinas referido en la sección anterior, el mismo en sí no constituye un manual o instructivo que describa las funciones de los fiscales al servicio del DPP con base en lo dispuesto en la sección 2.2 de este documento. Al respecto y teniendo en cuenta la dificultad puesta de presente por la representación del DPP durante la visita *in situ* en el sentido que requieren de instrumentos, manuales y/o guías que orienten a los fiscales acerca de la manera de cómo deben abordar los procesos penales que deriven de la comisión de prácticas corruptas, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.2. del capítulo II de este informe).

[112] Guarda relación con lo anterior el hecho que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del DPP puso de manifiesto también la necesidad de sus fiscales de contar con capacitación adecuada para la correcta y efectiva persecución de actos de corrupción y, en este sentido, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.3. del capítulo II de este informe).

[113] En cuarto lugar, si bien el Comité tomó nota de los diferentes sistemas electrónicos utilizados por el DPP para un intercambio expedito de información principalmente con la Corte Suprema del

26. Véase *supra* nota 13.

Caribe Oriental, considera conveniente que el Estado analizado considere redoblar sus esfuerzos para dotar a este órgano de control con herramientas tecnológicas que le permitan cumplir con mayor eficiencia y eficacia sus obligaciones constitucionales y legales, principalmente aquellas relacionadas con la persecución de las prácticas corruptas que generan responsabilidad penal, por lo que formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 3.4.4. del capítulo II de este informe).

[114] Sumado a lo anterior, el Comité, con base en la información recabada durante la visita *in situ*, toma nota también de los trabajos que el DPP viene desarrollando para la puesta en línea del que se dijo será el sitio web oficial del Servicio Nacional de Persecución Penal. En este sentido y reconociendo las bondades que ofrece en la actualidad el Internet para mantener al público informado acerca del quehacer de las instituciones gubernamentales y facilitar la consulta y accesibilidad de información de interés público, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a considerar adoptar las medidas que estimen necesarias a modo de establecer y mantener actualizado el citado sitio web, el cual, pudiera contener, entre otros aspectos, información acerca de los objetivos y funciones del DPP, marco jurídico y procedimientos para el cumplimiento de sus responsabilidades. (Véase recomendación 3.4.5. del capítulo II de este informe).

[115] En quinto lugar, con relación a los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, durante la visita *in situ* la representación del DPP manifestó su conformidad con los recursos financieros que se le asignan anualmente en el presupuesto del Estado, así como con el número de funcionarios profesionales con que cuenta, mismo que se ha ido incrementado en razón de la inclusión de fiscales policiales a las filas del DPP en virtud de un acuerdo administrativo suscrito entre el DPP y la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas como parte de la implementación del Sistema Nacional de Persecución Penal aludido en párrafos anteriores. No obstante, la misma representación puso de presente la necesidad de contar no sólo con mayor personal administrativo, sino que además cuando se presente una vacante en este tipo de posiciones, el personal sea provisto oportunamente por el órgano competente para evitar retrasos que pudieran afectar eventualmente el adecuado funcionamiento del DPP. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 3.4.6. del capítulo II de este informe).

[116] En sexto lugar, si bien la representación del DPP señaló que mantiene una permanente relación de coordinación con la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas, principalmente en cuanto a las investigaciones que ésta realiza de presuntos hechos punibles para su posterior enjuiciamiento ante los tribunales judiciales, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere fortalecer este tipo de relaciones a través de mecanismos efectivos de coordinación entre los actores involucrados en la persecución e investigación de prácticas corruptas que generen responsabilidad penal, incluyendo al DPP, la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas, la OAG y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras, a fin de establecer procedimientos y/o lineamientos efectivos y oportunos de intercambio de información y asesoría jurídica para la instauración adecuada ante los tribunales de los procesos penales relacionados con actos de corrupción. Al respecto, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.7. del capítulo II de este informe).

[117] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité toma nota de la información recaba con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del DPP, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 3.4.8. del capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[118] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no proporciona información sobre resultados del DPP en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con la persecución de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal. Lo anterior responde a que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de este órgano de control puso de presente que carece de información estadística sobre el desempeño de sus funciones y atribuciones. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará las recomendaciones correspondientes. (Véase recomendaciones 3.4.9 a 3.4.12 del capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[119] Con base en el análisis integral realizado con respecto al DPP en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[120] San Vicente y las Granadinas ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al DPP, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.

[121] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Adoptar las medidas necesarias para concluir la efectiva implementación del Servicio Nacional de Persecución Penal tendiente a fortalecer, entre otros aspectos, las facultades de supervisión del DPP sobre los procedimientos conducidos por los fiscales policiales. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Desarrollar instrumentos, manuales y/o guías que orienten a los fiscales a instituir y desarrollar de manera adecuada y efectiva los procesos penales relacionados con prácticas corruptas. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.3. Dotar al DPP con los recursos financieros necesarios que aseguren la capacitación periódica de los fiscales para el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades respecto de la correcta y efectiva persecución de los actos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas necesarias que permitan al DPP cumplir con mayor eficiencia y eficacia sus obligaciones constitucionales y legales, principalmente aquellas relacionadas con la persecución de prácticas corruptas que generen responsabilidad penal. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Adoptar las medidas necesarias para establecer y mantener actualizado el sitio web del Servicio Nacional de Persecución Penal el cual, pudiera contener, entre otros aspectos, información acerca de los objetivos y funciones del DPP, su marco jurídico y procedimientos para el cumplimiento de sus responsabilidades. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).

- 3.4.6. Dotar al DPP con los recursos humanos administrativos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con la persecución de los delitos de corrupción, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Implementar mecanismos de coordinación entre el DPP, la Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas, la OAG y la Unidad de Inteligencia Financiera, tendientes a establecer procedimientos y/o lineamientos efectivos y oportunos de intercambio de información y asesoría jurídica para el adecuado enjuiciamiento de los procesos penales relacionados con actos de corrupción. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del DPP, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase sección 3.2. del capítulo II de este informe).
- 3.4.9. Elaborar y publicar información estadística relativa a los enjuiciamientos adelantados en relación con los actos de corrupción tipificados en el Código Penal y los consagrados en la Convención que permita conocer cuántos se encuentran en curso; cuántos se encuentran suspendidos por cualquier razón; cuántos están pendientes sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántos se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellos se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántos han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.10. Elaborar y publicar información estadística relativa a las investigaciones adelantadas por quien tiene la competencia para hacerlo referidas al DPP en relación con los actos de corrupción tipificados en el Código Penal y los consagrados en la Convención que permita conocer cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.11. Elaborar y publicar información estadística relativa a los procesos judiciales instaurados en relación con los actos de corrupción tipificados en el Código Penal y los consagrados en la Convención que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).

- 3.4.12. Desarrollar, en el ámbito del DPP, un mecanismo de seguimiento de los casos de corrupción que presente ante las cortes judiciales, que le permita conocer la tramitación que se le esta dando a los mismos y sus resultados, y darle a éstos la divulgación necesaria para que los ciudadanos puedan apreciar sus esfuerzos en materia de persecución de actos de corrupción y contar con mayores elementos para evaluar su desempeño. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).

4. DEPARTAMENTO DE LAS COMISIONES DE SERVICIO

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[122] El SCD cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[123] La Constitución de San Vicente y las Granadinas, en su sección 77 establece la PSC, la cual, en términos de lo dispuesto en la sección 78.1 constitucional, posee las facultades de nombramiento y remoción de los cargos públicos, así como el ejercicio del control disciplinario sobre los ocupantes de los mismos, con excepción de los cargos a que se refiere la sección 78.3 de la misma Constitución^{27/}.

[124] En este sentido, con base en la información recabada durante la visita *in situ*, el SCD se constituye como una unidad autónoma que sirve de secretaría a la PSC y brinda a ésta el apoyo técnico y administrativo necesario para que cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales respecto al reclutamiento, selección y empleo de funcionarios públicos, así como su control disciplinario.

[125] En cuanto a sus objetivos, con la ocasión de la visita *in situ*, la representación del SCD enumeró, entre otros, los siguientes: facilitar el reclutamiento, la selección, la colocación y la retención de empleados de alta calidad; hacer un uso óptimo de los conocimientos y habilidades de todas las personas que exhiban potencial de excelencia; formular programas adecuados para aquellos funcionarios que no alcanzan los estándares requeridos; implementar y hacer cumplir las diversas Órdenes del Servicio Civil, el Reglamento del Servicio Público y los estatutos que rigen la gestión de la función pública; perfeccionar la capacidad de respuesta y la calidad del servicio que proporciona el SCD; mejorar los recursos humanos en la totalidad del país a través del desarrollo y la ejecución de programas de alta calidad; emprender una evaluación de las necesidades de capacitación para planear y ejecutar adecuadamente los programas de capacitación de alto nivel; proveer asesoría que oriente a los funcionarios públicos y ciudadanos que deseen cursar estudios universitarios; localizar y obtener fondos para programas de capacitación; e identificar personal que pueda facilitar e impartir programas de capacitación de alta calidad.

[126] Para el cumplimiento de lo anterior, el SCD se compone de dos divisiones, la División de Personal (*Personnel Division*) y la División de Capacitación (*Training Division*). La primera, es responsable de apoyar y hacer cumplir las normas y reglamentos de la función pública señalados en las Órdenes del Servicio Civil. Por otro lado, la División de Capacitación tiene bajo su responsabilidad la asignación y suministro de oportunidades de capacitación al público.

27. Sección 78.3 de la Constitución de San Vicente y las Granadinas: “Las disposiciones de esta sección no se aplicarán con relación a los siguientes cargos: a) cualquiera al que le sea aplicable la sección 79 de esta Constitución; b) el de Procurador General; c) el de Fiscal General; d) el de Director de Auditoría; e) cualquiera al que le sea aplicable la sección 83 de esta Constitución; o f) cualquiera en la Fuerza Policial.”

[127] En cuanto a sus decisiones, principalmente aquellas relacionadas con el nombramiento, promoción y transferencias de funcionarios públicos, la SCD, en el ámbito de su competencia, formula recomendaciones a la PSC, la cual, de conformidad con las disposiciones aplicables tanto de la Constitución como del Reglamento de la PSC las considera y, si procede, las adopta. Las decisiones de la PSC son de estricto cumplimiento, pero podrán recurrirse ante la Junta de Apelación del Servicio Público (*Public Service Board of Appeal*) de conformidad con lo previsto en la sección 86 constitucional y demás aplicables del Reglamento de la PSC.

[128] El Oficial Jefe de Personal (*Chief Personnel Officer*) es la máxima autoridad del SCD, quien es nombrado por el Gobernador General con sujeción a la aprobación del Gabinete de Ministros. Sus funciones y responsabilidades están previstas en diversas disposiciones tanto del Reglamento de la PSC como de las Órdenes del Servicio Civil del Estado analizado.

[129] En cuanto a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, su nombramiento, remoción, requisitos para acceder a los cargos; así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones incluyendo a los Directores de las Divisiones de Personal y Capacitación, el personal del SCD está sujeto al régimen general para el funcionariado público del Estado analizado previsto en las secciones 77 y 78 constitucionales, así como en las disposiciones aplicables del Reglamento de la PSC y en las Órdenes del Servicio Civil, aludidas con antelación.

[130] En relación con la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, la representación de la SCD, con ocasión de la visita *in situ*, señaló que la Unidad para la Reforma del Sector Público se encuentra trabajando en la actualización de las descripciones de puestos, no sólo del personal del SCD, sino de otras dependencias de la administración pública.

[131] En el mismo sentido, la representación del SCD aludió a los esfuerzos que vienen realizando para que esta dependencia cuente a la brevedad con sistemas tecnológicos modernos para facilitar el desarrollo de las labores, principalmente en cuanto a la gestión de los recursos humanos al servicio del Estado.

[132] Sobre la manera en que suministra información a los ciudadanos acerca de sus objetivos y funciones, el SCD cuenta con una sección en el portal oficial en Internet del Gobierno de San Vicente y las Granadinas disponible en www.psc.gov.vc, en la que se da a conocer, entre otros aspectos, sus objetivos, funciones y puntos de contacto. Asimismo, existe un enlace para la publicación de vacantes en el servicio público, además de información, en la sección de capacitación, de becas escolares que ofrecen distintas universidades extranjeras, Estados y organizaciones internacionales, entre éstas la OEA, a los ciudadanos sanvicentinos.

[133] Con relación a los mecanismos de control interno, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del SCD se refirió a aquellos que utiliza y que son controlados por el Ministerio de Finanzas para compras públicas y utilización de recursos materiales. Asimismo, respecto a la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el desempeño no sólo del personal a su servicio, sino de toda la administración pública, la misma representación, puso de presente la facultad que posee el Oficial Jefe de Personal de recibirlas y darles trámite ante la PSC, en los términos previstos en el Reglamento de ésta. Sin embargo, aclaró que sólo las denuncias presentadas por funcionarios públicos están reglamentadas, más no las presentadas por los ciudadanos, la cuales, por no estar reguladas, no es posible exigir jurídicamente su tramitación.

[134] Respecto a la manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, como quedó señalado en las secciones 1.1; 2.1 y 3.1. del capítulo II de este informe en relación con la OAG, la DOA y el DPP, el SCD, como departamento autónomo, se rige también por lo dispuesto en el capítulo V constitucional y las leyes presupuestarias anuales del ejercicio fiscal correspondiente.

[135] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, en el marco de la visita *in situ*, la representación del SCD informó que oficialmente en la actualidad no rinde ningún tipo de informe sobre su gestión a la PSC, como su órgano superior, señalando, como mecanismo más cercano, la elaboración de los “Planes Corporativos” a los que ya se ha hecho referencia en relación con los otros órganos analizados en el presente informe.

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[136] El SCD cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[137] En primer lugar, en relación con el marco jurídico que rige el actuar del SCD, principalmente contenido en las Órdenes del Servicio Civil y en el Reglamento de la PSC, aludidos ambos en la sección anterior, el Comité estima conveniente que, en relación con las primeras, el Estado analizado considere su actualización y adecuación con los estándares actuales necesarios para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, teniendo en cuenta que dichas Órdenes, además de ser anteriores a la propia Constitución, algunas de sus disposiciones no son aplicables a situaciones presentes. Lo anterior, cree el Comité, contribuiría a lograr el objetivo de lo previsto en el párrafo 9º del artículo III de la Convención, en el sentido de que el SCD, como órgano de control, desarrolle mecanismos ‘modernos’ para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. El Comité le formulará una recomendación en este sentido. (Véase recomendación 4.4.1. del capítulo II de este informe).

[138] En segundo lugar, durante la visita *in situ*, con la representación del SCD se pusieron de presente algunas de las preocupaciones que los otros órganos de control entrevistados expresaron en relación con determinados aspectos relativos a la selección y dotación de personal por parte de la PSC. Al respecto, la representación del SCD explicó los procedimientos y prácticas que sigue para el llenado de vacantes en las distintas dependencias del Gobierno Central, señalado, entre otros aspectos que, una vez el Ministerio de Finanzas haya liberado la vacante a solicitud del dependencia interesada, por regla general, esta vacante será ocupada por el funcionario recomendado por el Secretario Permanente (*Permanent Secretary*) de la oficina, dependencia o ministerio en la cual se presente la vacante respectiva. Sin embargo, se dijo, que si el Secretario Permanente así lo considera, podrá recomendar también que la vacante sea anunciada públicamente, sin que para ello se hayan identificado disposiciones claras que requieran tanto la fundamentación de la recomendación de un Secretario Permanente, o bien sobre la obligación de hacer pública una vacante.

[139] Teniendo en cuenta que los anteriores aspectos fueron detalladamente analizados en el Informe de la Segunda Ronda^{28/}, el Comité no formulará recomendaciones al respecto, sino que reitera aquellas contenidas en dicho Informe relativas a la necesidad de que el Estado analizado considere fortalecer sus sistemas para la contratación de funcionarios públicos a través de la adopción de

28. Véase *supra* nota 13.

procedimientos jurídicos y administrativos adecuados, y criterios claramente definidos para la publicación de las oportunidades o vacantes de vinculación al servicio público, que garanticen el acceso al servicio público a través de sistemas basados en los principios de publicidad, equidad y eficiencia que consagra la Convención.

[140] En tercer lugar, con base en la información recabada durante la visita *in situ* y sin perjuicio de reconocer los esfuerzos que viene realizando la Unidad para la Reforma del Sector Público para actualizar las descripciones de puestos, no sólo del personal del SCD, sino de otras dependencias del Gobierno Central, el Comité denota insuficiencia y, en algunos casos, inexistencia de documentos u otros medios que permitan identificar objetivamente los requisitos mínimos exigibles para ocupar un cargo dentro de la administración pública, incluyendo los cargos profesionales al servicio de los órganos analizados en el presente informe. En este sentido, el Comité se reserva nuevamente el derecho de formular recomendaciones sobre los sistemas de contratación de funcionarios públicos por ser materia de otra Ronda, pero deja constancia de la importancia de que el Estado analizado adopte las medidas para contar con dichos documentos, teniendo en cuenta que los requisitos mínimos exigibles permiten de cierta manera brindar al Estado y a la ciudadanía la certeza de que quienes están desempeñando un cargo público, cuentan con la experiencia y competencias académicas suficientes para ello.

[141] En cuarto lugar, como quedó señalado en la sección anterior, además de apoyar a la PSC en todos los aspectos relacionados con la selección, promoción, transferencia y gestión de los recursos humanos en la administración pública, la segunda área competencial en nivel de importancia son los proyectos, programas y oportunidades de capacitación que el SCD debe proporcionar no sólo al funcionariado público de San Vicente y las Granadinas sino también a los ciudadanos interesados en continuar sus estudios. Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del SCD puso de presente la insuficiencia de recursos humanos y financieros con que cuenta para cumplir a cabalidad con esta función. Como ejemplo de ello, la misma representación del SCD señaló que en razón de esta insuficiencia no ha sido posible poner en funcionamiento el Comité Nacional de Capacitación previsto en el Plan de Desarrollo del Gobierno Central, ni tampoco satisfacer las solicitudes y necesidades de capacitación que requieren las diferentes dependencias del Estado como puede observarse en los análisis hechos a los otros órganos de control a que se refiere el presente informe, por lo que el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.2. del capítulo II de este informe).

[142] No obstante lo anterior, el Comité toma nota también de las tareas de capacitación a las que hizo referencia la representación del SCD en el marco de la visita *in situ* y, al respecto, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere complementar estas tareas a través de la inclusión de cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia y en este sentido formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.3. del capítulo II de este informe).

[143] En quinto lugar, en lo que tiene que ver con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del SCD señaló que en la actualidad se encuentran trabajando en la elaboración de este tipo de documentos en atención a la importancia, especificidad y sensibilidad de las responsabilidades que debe cumplir su personal. Al respecto, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.4. del capítulo II de este informe).

[144] En sexto lugar, el Comité reconoce los esfuerzos que el SCD viene realizando para contar a la brevedad con sistemas tecnológicos modernos para facilitar el desarrollo de las labores,

principalmente en cuanto a la gestión de recursos humanos al servicio del Estado y en este sentido formulará una recomendación para que, teniendo en cuenta la utilidad que reviste la tecnología para facilitar el desarrollo de las labores que cumplen los órganos de control, el Estado analizado considere adoptar las medidas necesarias para que el SCD cuente con sistemas informáticos modernos que le permitan, por ejemplo, crear y mantener actualizadas bases de datos sobre los procesos de selección, promoción y transferencias, así como sobre sus programas de capacitación, incluyendo también bases de datos personales y salariales. (Véase recomendación 4.4.5. del capítulo II de este informe).

[145] En séptimo lugar, en cuanto a la ausencia de mecanismos y/o procedimientos que permitan y regulen la presentación de reclamos, quejas o denuncias por parte de los particulares relacionadas con el desempeño de los funcionarios públicos, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas necesarias a modo de promover y regular la denuncia ciudadana sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Asimismo, para estos efectos, el Comité invita al Estado analizado a que considere los criterios establecidos en la “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{29/}. Lo anterior contribuiría al logro de los propósitos de la Convención, particularmente aquellos relacionados con la obligación de denunciar prácticas corruptas y de desarrollar mecanismos modernos para prevenir y detectar dichas prácticas, previstos en los párrafos 1º y 9º de su artículo III, respectivamente. El Comité formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 4.4.6. del capítulo II de este informe).

[146] En octavo lugar, el Comité, teniendo en cuenta la dificultad puesta de presente por la representación del SCD durante la visita *in situ* sobre las recurrentes demoras por parte de ciertos Secretarios Permanentes y Jefes de Departamento para suministrarle oportunamente la información que requiere para el cumplimiento de sus funciones de control disciplinario y administración de personal, formulará una recomendación al Estado analizado. (Véase recomendación 4.4.7. del capítulo II de este informe).

[147] Finalmente, en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones, el Comité toma nota de la información recaba con ocasión de la visita *in situ*. Sin embargo, con base en la misma, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del SCD, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase recomendación 4.4.8. del capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[148] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no proporciona información sobre resultados del SCD en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades principalmente aquellas relacionadas con el control disciplinario sobre los servidores públicos. Lo anterior responde a que, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del SCD puso de presente que carece de información estadística sobre el desempeño de dichas funciones. Con base en lo anterior, el Comité no puede hacer una valoración integral sobre los resultados en este campo y, en este sentido, formulará una recomendación. (Véase recomendación 4.4.9. del capítulo II de este informe).

[149] Asimismo, en cuanto a sus atribuciones en materia de capacitación, si bien durante la visita *in situ* la representación del SCD señaló que cuenta con programas anuales de entrenamiento para

29. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/ley_denuncia.htm

servidores públicos, el Comité no tuvo oportunidad de conocer el contenido, alcance y resultados de los mismos. En este sentido y en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado tendiente a publicar, en el sitio web del SCD, dichos programas, de tal manera que la ciudadanía tenga conocimiento de la labor que viene desempeñando este órgano en cumplimiento de esta función. (Véase recomendación 4.4.10. del capítulo II de este informe).

[150] Finalmente y teniendo en cuenta que la visión del SCD es “...transformar el servicio público en un organismo dinámico, eficiente y con principios capaz de prestar servicios de alta calidad”, el Comité estima conveniente también que San Vicente y las Granadinas considere desarrollar campañas y/o programas que orienten no sólo a los servidores públicos, sino también a los particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado, para alcanzar este objetivo. (Véase recomendación 4.4.11. del capítulo II de este informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[151] Con base en el análisis integral realizado con respecto al SCD en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[152] San Vicente y las Granadinas ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al SCD, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.

[153] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Considerar la actualización de las normas que rigen al SCD, en especial las Órdenes del Servicio Civil de la Función Pública de San Vicente y las Granadinas, que fueron expedidas con anterioridad a la Constitución de 1979, adecuándolas a los estándares actuales necesarios para un correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Dotar al SCD con los recursos humanos y financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con el diseño, implementación e impartición de capacitación a los servidores públicos para el adecuado cumplimiento de sus funciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para complementar los programas de capacitación que imparte el SCD con cursos de ética, probidad, transparencia, y normativa deontológica que rige a los funcionarios públicos. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Elaborar procedimientos documentados, manuales o guías que faciliten y hagan más eficiente y expedito el desarrollo de las tareas a cargo del personal al servicio del SCD, en atención a la importancia, especificidad y sensibilidad de las mismas. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).

- 4.4.5. Dotar al SCD con sistemas informáticos y herramientas tecnológicas modernas para una efectiva y eficiente gestión y para la promoción de la capacitación de los recursos humanos en la administración pública. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Establecer mecanismos con el fin de promover y regular la denuncia ciudadana sobre los actos de corrupción en la función pública, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos”. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Establecer mecanismos eficientes y efectivos de coordinación interinstitucional que faciliten y garanticen que los Secretarios Permanentes, Jefes de Departamento o quienes tengan la responsabilidad de hacerlo, suministren oportunamente al SCD la información que éste requiere para el cumplimiento de sus funciones de control disciplinario y gestión de personal en la administración pública. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.8. Adoptar las medidas que se estimen pertinentes a modo de establecer, en el marco del SCD, mecanismos de rendición de cuentas o la presentación de informes de gestión sobre el cumplimiento de sus funciones y la manera de hacer éstos públicos. (Véase sección 4.2. del capítulo II de este informe).
- 4.4.9. Elaborar y publicar información estadística relativa a los procedimientos disciplinarios que se siguen ante la PSC con sujeción a los disposiciones aplicables de la Constitución, el Reglamento de la PSC y las Órdenes del Servicio Civil, que incluya, entre otros aspectos, el número total de casos investigados; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas. (Véase sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.10. Adoptar las medidas pertinentes que permitan a los servidores públicos y ciudadanía en general consultar, a través del portal oficial en Internet del Gobierno, los planes y/o programas anuales de capacitación y sus resultados que desarrolla el SCD. (Ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).
- 4.4.11. Desarrollar campañas y/o programas que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado. (Ver sección 4.3. del capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[154] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado no identificó buenas prácticas que compartir con los demás Estados miembros del MESICIC, de conformidad con el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención seleccionada*

en la Cuarta Ronda y la Estructura de los informes por país adoptadas, ambas, por el Comité para dicha Ronda. No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, el Estado analizado identificó como una buena práctica, en relación con el SCD, la utilización de *software* gratuito, como *Skype*, para facilitar la interacción oportuna y personalizada con estudiantes que requieran asesoría y asistencia en relación con las becas que se ofrecen a través del SCD.

IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS^{30/}

[155] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por San Vicente y las Granadinas en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en el Informe de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas^{31/}, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado VI de la *Metodología* adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[156] El Comité también tomará nota en esta sección del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, al igual que asegurar que las leyes sobre esta materia se apliquen plenamente a todos los funcionarios públicos para hacer posible la eficaz observancia práctica del sistema de ética pública.

Medidas sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) *Fortalecer, complementar y actualizar las normas que rigen la conducta de la generalidad de los servidores públicos, incluyendo aquellas disposiciones orientadas a prevenir conflictos de intereses, sin perjuicio de los regímenes dirigidos a sectores particulares que por su especificidad puedan requerir un tratamiento especializado.*

30. El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el anexo I de este informe.

31. Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/vct.htm>

- b) *Crear o fortalecer los mecanismos que garanticen que no se produzcan nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes dentro de la función pública.*
- c) *Crear e implementar mecanismos que permitan determinar, en casos concretos, si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de conflicto de intereses y que permita adoptar medidas necesarias a fin de proteger el interés público, tales como la desvinculación del ejercicio de sus funciones, su separación del conocimiento oficial del asunto, renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez de las decisiones proferidas por quien se encuentre en tal situación.*
- d) *Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente en ejercicio de sus funciones, en este último caso durante un periodo razonable.*

[157] En su respuesta al cuestionario^{32/}, el Estado analizado no presenta información distinta a la que fue analizada por el Comité en los informes de la Segunda y Tercera Rondas.

[158] No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, se consultó a San Vicente y las Granadinas sobre el estado que guardan los proyectos de Ley de Integridad de la Función Pública^{33/} (*Integrity in Public Life Draft Bill*), así como de Prevención de la Corrupción^{34/} (*Prevention of Corruption Draft Bill*) ambos de 2005, los cuales podrían abordar, entre otros aspectos, los elementos a que se refieren las medidas a) a d) sugeridas.

[159] Al respecto, la representación del Estado analizado informó que tales proyectos se encuentran sujetos aún a procesos de consultas con el fin de que las medidas sugeridas por el Comité sean debidamente consideradas en los mismos. Sin embargo, señaló que hasta la fecha, la OAG, como órgano responsable de la proyección de leyes, no ha recibido ulteriores comentarios a los mismos siendo que ambos proyectos continúan constituyéndose como parte integral de su agenda legislativa.

[160] No obstante, para abordar los aspectos a que se refieren las medidas sugeridas por el Comité, el Estado analizado manifestó que viene aplicando, entre otras, algunas normas que de cierta forma permiten prevenir conflictos de intereses contenidas principalmente en la Constitución, en la Ley de Privilegios, Inmunidades y Potestades del Parlamento, en el Código Penal, y en la Ley y Reglamento de la Policía, pero sin que se hayan adoptado nuevas u otras disposiciones y/o medidas relacionadas con las materias sobre las que versan tanto la recomendación como las medidas sugeridas.

[161] Asimismo, como parte de las dificultades identificadas en el marco de la visita *in situ* en cuanto a la aprobación de ambos proyectos legislativos, el Estado analizado señaló que el Gobierno ha tenido que priorizar, sobre éstos, la adopción de otras leyes de carácter financiero que respondan a las crisis económicas y desastres naturales por los que desafortunadamente ha tenido que atravesar San Vicente y las Granadinas en años recientes.

32. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 8 a 15, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_resp.pdf

33. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_int_publ_life_bill.pdf

34. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_prev_corr_bill.pdf

[162] Sin perjuicio de esto último, preocupa al Comité el retraso por casi una década de la consideración y eventual adopción de ambas iniciativas legislativas que se estiman pertinentes para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de las medidas a) a d) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe y sugiere, además, la posibilidad de que se tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de conflictos de intereses disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{35/}. (Véase medidas a) a d) de la sección 1.1 en el anexo I del presente informe).

[163] Cabe señalar, asimismo, que con ocasión de la visita *in situ*, las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar, coincidieron en la transcendencia e importancia que reviste contar a la brevedad con normativas como las contempladas en los proyectos de ley aludidos, dejando de manifiesto, además, su preocupación por el considerable retraso de su presentación y eventual aprobación por parte el Parlamento.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer y actualizar los sistemas de control y uso de los recursos dentro de la gestión pública, desarrollando normas susceptibles de aplicación coercitiva a todas las autoridades y funcionarios públicos que establezcan la obligación de preservar y usar adecuadamente los recursos que se les asignen en el desempeño de sus funciones.

[164] En su respuesta al cuestionario^{36/}, el Estado analizado no presenta información distinta a la que fue analizada por el Comité en los informes de la Segunda y Tercera Rondas.

[165] Asimismo, además de las consideraciones expuestas sobre la implementación de las medidas a) a d) de la recomendación de la sección 1.1 anterior, que se estima guardan relación con la presente recomendación, el Estado analizado señala en su respuesta, como dificultad observada en los procesos de su implementación “...es posible que se experimenten dificultades potenciales al intentar romper con la cultura de abuso [mal uso] de los recursos oficiales para uso personal que caracteriza al servicio público”.

[166] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que San Vicente y las Granadinas dé atención adicional a la implementación de la recomendación de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe y sugiere, además, la posibilidad de que se tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de preservación y el uso adecuados de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{37/}. (Véase única recomendación de la sección 1.2 en el anexo I del presente informe).

35. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_conflictos_int.doc

36. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 15 a 17, *supra* nota 32.

37. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_preserv_recur.doc

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) *Establecer medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*
- b) *Adoptar e implementar medidas de protección para los funcionarios públicos que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.*

[167] En su respuesta al cuestionario^{38/}, el Estado analizado no presenta información distinta a la que fue analizada por el Comité en los informes de la Segunda y Tercera Rondas.

[168] Asimismo, además de las consideraciones expuestas sobre la implementación de las recomendaciones de las secciones 1.1 y 1.2 anteriores, que se estima guardan relación con la presente recomendación y medidas sugeridas, el Estado analizado señala en su respuesta, como dificultad observada en los procesos de su implementación “...*Es posible que los funcionarios se muestren reacios a denunciar prácticas corruptas porque temen que tal denuncia les acarree consecuencias negativas.*”

[169] No obstante lo anterior, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Estado analizado, además de referirse a la protección que brinda la Constitución a la estabilidad laboral de los servidores públicos, lo cual podría considerarse como un incentivo para denunciar actos de corrupción en la función pública sin temor a represalias, señaló que la OAG se encuentra trabajando, como tema importante en su agenda legislativa, en la elaboración del proyecto de Ley del Servicio Público (*Public Service Bill*) que abordará, dijo, elementos como los contenidos en las medidas a) y b) de la recomendación anteriormente transcrita.

[170] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que San Vicente y las Granadinas dé atención adicional a la implementación de la recomendación de la sección 1.2 del capítulo IV de este informe y

38. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 18 a 20, *supra* nota 32.

sugiere, además, la posibilidad de que el Estado analizado tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{39/}. (Véase medidas a) y b) de la sección 1.3 en el anexo I del presente informe).

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Establecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y regular su publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean pertinentes.

Medida a) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Implementar una normativa específica, considerando la iniciativa legal existente, que incluya plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de la declaración de los ingresos, activos y pasivos, por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley, que incluya, además, un régimen sancionatorio para quienes no cumplan con la obligación de presentar dichas declaraciones. Estos sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas constituyen un instrumento para evitar y detectar conflictos de intereses y actos o actividades ilícitas.

[171] En su respuesta al cuestionario^{40/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos que podrían contribuir al avance en la implementación de la anterior medida.

[172] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Estado analizado puso de presente la adopción de nuevas disposiciones jurídicas en materia de recaudación de impuestos que tienden a fortalecer los controles de auditoría fiscal. Sin embargo, tratándose de disposiciones específicas que establezcan sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos y regulen, si corresponde, su publicidad, la misma representación reiteró las consideraciones hechas en relación con el estado que guarda el proyecto de Ley de Integridad de la Función Pública que, entre otros aspectos, regularía también dichos sistemas.

[173] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe. Asimismo, para estos efectos, el Comité cree conveniente que el Estado analizado considere los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas” disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{41/}, por lo que estima replantear dicha medida de la siguiente manera:

[174] – Considerar adoptar una normativa específica, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan

39. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_obligacion_denun.doc

40. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 20 a 21, *supra* nota 32.

41. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_declaracion.pdf

Funciones Públicas”, que incluya plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de la declaración de los ingresos, activos y pasivos, por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley, que incluya, además un régimen sancionatorio para quienes no cumplan con la obligación de presentar dichas declaraciones y las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las mismas, con sujeción al sistema jurídico vigente. (Véase única medida de la sección 2 en el anexo I del presente informe).

[175] Cabe señalar, asimismo, que con ocasión de la visita *in situ*, las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar, coincidieron igualmente en la conveniencia y necesidad de que el Estado analizado considere adoptar a la brevedad este tipo de sistemas para fortalecer y hacer más eficiente la detección de eventuales actividades ilícitas cometidas por quienes desempeñan funciones públicas.

Medida b) sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones de los ingresos, activos y pasivos, con sujeción al sistema jurídico vigente.

[176] En su respuesta al cuestionario^{42/}, el Estado analizado no presenta información con respecto a la anterior medida. Sin embargo, teniendo en cuenta que los elementos de la misma se encuentran contenidos en la reformulación sugerida de la medida a) de la recomendación de esta sección, el Comité propone su eliminación por considerarla redundante.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11, DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Fortalecer y, en su caso, crear los órganos de control superior en las funciones que desarrollan sobre el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una periódica evaluación y seguimiento de las mismas.

[177] En su respuesta al cuestionario^{43/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos en relación con la implementación de la recomendación anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la sección 3 del capítulo II del presente informe se efectuó un análisis actualizado y pormenorizado de los órganos de control superior identificados por el Estado analizado en términos del artículo III, párrafo 9º, de la Convención, el Comité se acoge a lo indicado en dicha sección y estima, por lo tanto, que esta recomendación es redundante.

[178] No obstante lo anterior, con base en la información que tuvo a su disposición y de las aportaciones que recibió de las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que

42. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 22, *supra* nota 32.

43. *Ibid.*, pp. 22 a 24.

fueron invitadas a participar en el marco de la visita *in situ*, el Comité deja constancia que el proyecto de Ley de Integridad en la Función Pública aludido en diversas ocasiones, contempla el establecimiento de una Comisión de Integridad para el Estado (*Integrity Commission for the State*), la cual, de concretarse su existencia jurídica, tendría, entre otras funciones, la recepción, verificación y archivo de las declaraciones a que se refiere el mismo proyecto, lo que podría considerarse como un avance en la promoción de los propósitos de la Convención, pudiendo ser valorado como órgano de control superior en relación con lo dispuesto en los párrafos 4º y 9º del artículo III de la Convención.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

Recomendación sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Establecer un órgano con competencia específica en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción que incluya a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, tomando en consideración la iniciativa legal existente (Proyecto de Ley de las Organizaciones de la Sociedad Civil).

[179] En su respuesta al cuestionario^{44/}, el Estado analizado presenta información que estima está relacionada con la implementación de la recomendación anterior.

[180] No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, se consultó a San Vicente y las Granadinas sobre el estado que guarda el proyecto de Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil^{45/} (*Civil Society Organizations Draft Bill*) de 2005 a que se refiere la misma recomendación.

[181] Al respecto, la representación del Estado analizado señaló que pese a la ausencia de desarrollos posteriores a la elaboración de dicho proyecto, persiste la voluntad del Estado en avanzar hacia la implementación de mecanismos que promuevan la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 del artículo III de la Convención y, en este sentido, la OAG estaría retomando la consideración de este proyecto a través de las acciones que sean necesarias para impulsar su adopción y promulgación.

[182] Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar en el marco de la visita *in situ* manifestaron su beneplácito por la existencia de esta iniciativa legal, la cual algunas de ellas desconocían hasta ese momento, y coincidieron en la importancia de que el Estado analizado redoble esfuerzos para contar con una normativa moderna que facilite, promueva y respete su derecho a participar en la prevención y lucha contra corrupción.

[183] En vista de lo anterior, el Comité estima del caso replantear como sigue la recomendación de la sección 4.1 del capítulo IV del presente informe para centrarse en los aspectos señalados:

44. *Ibíd.*, pp. 24 y 25.

45. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_civ_soc_org_act_05.pdf

[184] – Considerar adoptar una normativa específica con el objeto de establecer, fortalecer y/o perfeccionar, según corresponda, los mecanismos de participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. (Véase única recomendación de la sección 4.1 en el anexo I del presente informe).

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso a la información.

Medidas sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) *Adoptar, tan pronto como sea posible, las medidas necesarias para la promulgación y plena vigencia de la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003.*
- b) *Establecer mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003 impone a las autoridades públicas, incluyendo un régimen de sanciones para aquellos servidores que incumplan con dichas obligaciones.*
- c) *Establecer mecanismos administrativos que permitan impugnar las decisiones tomadas de acuerdo con la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003 por las autoridades públicas.*
- d) *Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información pública, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto.*

[185] En su respuesta al cuestionario^{46/}, el Estado analizado no presenta información distinta a la que fue analizada por el Comité en los informes de la Segunda y Tercera Rondas.

[186] En este sentido, con ocasión de la visita *in situ*, se consultó a San Vicente y las Granadinas sobre el estado que guarda la Ley de Libertad de Información^{47/} (*Freedom of Information Act*) adoptada en 2003 pero pendiente de entrar en vigor por carecer, hasta la fecha, de promulgación oficial en términos de lo dispuesto en la sección 2 del mismo ordenamiento.

[187] Al respecto, la representación del Estado analizado señaló que si bien la Ley de Libertad de Información está sin promulgar, la promoción del acceso a la información pública constituye una política de Estado y, en este sentido, se han venido impulsando, entre otros aspectos, la utilización de los medios de comunicación, en particular, el Internet para la difusión de información del Gobierno Central, además de participar en discusiones de los proyectos HIPCAR^{48/} y EGRIP^{49/}, el cual, con base en la información que el Comité tuvo a su disposición, tiende a apoyar al Estado analizado en el proceso de promulgación de la citada Ley.

46. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 25 a 30, *supra* nota 32.

47. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_svg_fre_info_act_03.pdf

48. Véase: <http://goo.gl/EPfjFu>

49. Véase: <http://goo.gl/D0HYw0>

[188] No obstante lo anterior, preocupa al Comité esta demora de más de 10 años para que el Estado analizado adopte las medidas necesarias para la promulgación y plena vigencia de la citada Ley, sin que para ello se haya logrado identificar las causas o circunstancias que han dado lugar a esta considerable dilación.

[189] En este sentido, el Comité reitera sus consideraciones y conclusiones contenidas en el Informe de la Primera Ronda^{50/} con relación a esta tema, e insta a San Vicente y las Granadinas a brindar atención adicional a la implementación de la recomendación de la sección 4.2 del capítulo IV de este informe, así como de las medidas a) a d) sugeridas. (Véase medidas a) a d) de la recomendación de la sección 4.2 en el anexo I del presente informe).

[190] Cabe señalar, que con ocasión de la visita *in situ*, las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que fueron invitadas a participar, manifestaron su preocupación por la demora aludida, así como su legítimo interés de contar, a la brevedad, con un régimen vigente y vinculante que garantice efectiva y eficazmente el acceso a la información en poder de las autoridades públicas.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendaciones sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

4.3.1. *Establecer mecanismos de consulta que permitan generar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil opiniones y propuestas a ser tomadas en cuenta para prevenir, detectar, investigar y castigar la corrupción*

4.3.2. *Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.*

[191] En su respuesta al cuestionario^{51/}, el Estado analizado no presenta información con relación a las anteriores recomendaciones.

[192] A este respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Estado analizado señaló que si bien cuenta con ciertos mecanismos informales de consulta con algunos sectores de la sociedad civil en el ámbito de la OAG, la Real Fuerza Policial, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Autoridad de Servicios Financieros, éstos no refieren a aspectos relacionados con la prevención y el combate de la corrupción.

[193] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que San Vicente y las Granadinas dé atención adicional a la implementación de las recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe, y sugiere, además, la posibilidad de que se tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de participación de la sociedad civil disponible en el Portal

50. Véase el “Informe relativo a la implementación en San Vicente y las Granadinas de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, pp. 14 a 16, 23 y 24, *supra* nota 12.

51. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 30 a 32, *supra* nota 32.

Anticorrupción de las Américas^{52/}, la cual, en su apartado 2, refiere a los mecanismos de consulta. (Véase recomendaciones 4.3.1 y 4.3.2 de la sección 4.3 en el anexo I del presente informe).

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendaciones sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- 4.4.1. *Desarrollar, tomando en cuenta su régimen jurídico interno, normas y procedimientos que creen, mantengan y fortalezcan mecanismos para estimular la participación en la gestión pública de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas como parte de los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.*
- 4.4.2. *Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.*

[194] En su respuesta al cuestionario^{53/}, el Estado analizado no presenta información con relación a las anteriores recomendaciones.

[195] A este respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Estado analizado reiteró las consideraciones hechas en relación con la implementación de las recomendaciones a que se refiere la sección 4.3 anterior en el sentido de que si bien cuenta también con mecanismos informales, en este caso para estimular la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la gestión pública, éstos no refieren a los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas destinados a prevenir la corrupción, como se desprende de la primera recomendación.

[196] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que San Vicente y las Granadinas dé atención adicional a la implementación de las recomendaciones 4.4.1 y 4.4.2 de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, así como la posibilidad nuevamente de que se tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de participación de la sociedad civil disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{54/}, la cual, en su apartado 3, refiere a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública. (Véase recomendaciones 4.4.1 y 4.4.2 de la sección 4.4 en el anexo I del presente informe).

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Establecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.

52. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_consulta.doc

53. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 32 a 34, *supra* nota 32.

54. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_consulta.doc

Medidas sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) *Promover, cuando corresponda, métodos que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.*
- b) *Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.*

[197] En su respuesta al cuestionario^{55/}, el Estado analizado suministra la siguiente información con relación a la medida a):

[198] *“El gobierno emplea los medios de comunicación para ventilar y debatir aquellas políticas en que se expresan los puntos de vista del público... Los puntos de vista del público se expresan en muchas estaciones de radio y televisión y en publicaciones semanales. Se efectúan amplias consultas sobre los proyectos de ley antes de su promulgación. Asimismo, todos los proyectos de ley que se formulan en el país se publican en los periódicos y están disponibles en el Ministerio de Asuntos Jurídicos para que el público pueda consultarlos antes de la promulgación de la ley.”*

[199] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Estado analizado se refirió a las iniciativas que en el ámbito de la Unidad para la Reforma del Sector Público se están impulsando en aras de implementar mecanismos como los que sugiere la recomendación anteriormente transcrita.

[200] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que San Vicente y las Granadinas dé atención adicional a la implementación de las medidas a) y b) de la recomendaciones de la sección 4.5 del capítulo IV de este informe, así como la posibilidad nuevamente de que se tome en cuenta, para efectos de su implementación, la “Guía Legislativa” elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC sobre elementos básicos en materia de participación de la sociedad civil disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas^{56/}, la cual, en su apartado 4, refiere a los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública. (Véase medidas a) y b) de la recomendación de la sección 4.5 en el anexo I del presente informe).

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Asistencia recíproca

Recomendación 5.1.1 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la Convención y en otros tratados suscritos por San Vicente y las Granadinas.

55. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 34 a 36, *supra* nota 32.

56. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/gl_consulta.doc

[201] En su respuesta al cuestionario^{57/}, el Estado analizado presenta la siguiente información como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la anterior recomendación:

[202] *“En el ejercicio de sus funciones de difusión y concientización, la Unidad de Inteligencia Financiera ha impartido capacitación sistemática para las instituciones financieras. La mayor parte de esta capacitación se imparte empresa por empresa y los programas típicos consisten en sesiones estructuradas que cubren elementos clave de un programa de capacitación eficaz. Se ha llevado a cabo seguimiento de estas capacitaciones cuando así se ha solicitado o cuando la UIF ha detectado deficiencias. La capacitación impartida por la UIF se complementa con instrucción de seguimiento y boletines informativos periódicos.”*

[203] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la recomendación 5.1.1. de la sección 5.1 del capítulo IV de este informe, reflejados en las acciones antes descritas, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que, con base en la información anterior, así como la recabada durante la visita *in situ*, no identifica que tales esfuerzos estén dirigidos a las autoridades y otros funcionarios competentes para que conozcan y apliquen las disposiciones en materia de asistencia mutua en la investigación y/o juzgamiento de actos de corrupción. (Véase recomendación 5.1.1 de la sección 5.1 en el anexo I del presente informe)

Recomendación 5.1.2 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de San Vicente y las Granadinas hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención.

[204] En su respuesta al cuestionario^{58/}, el Estado analizado no presenta información con relación a la anterior recomendación.

[205] Al respecto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la recomendación 5.1.2 de la sección 5.1 del capítulo IV de este informe, teniendo en cuenta que, con base en la información anterior, así como la recabada durante la visita *in situ*, identifica una insuficiencia de acciones concretas para este propósito. (Véase recomendación 5.1.2 de la sección 5.1 en el anexo I del presente informe)

5.2. Cooperación técnica mutua

Recomendación 5.2.1 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Determinar aquellas áreas específicas en las cuales San Vicente y las Granadinas considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, el Estado analizado debería determinar y priorizar las solicitudes de cooperación técnica mutua.

57. Véase respuesta de San Vicente y las Granadinas al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 36 a 37., *supra* nota 32.

58. *Ibid.*, pp. 37 y 38.

[206] En su respuesta al cuestionario^{59/}, el Estado analizado no presenta información con relación a la anterior recomendación.

[207] No obstante, con base en la información que tuvo a su disposición y la recabada durante la visita *in situ*, el Comité denota que San Vicente y las Granadinas ha venido siendo beneficiario de distintos proyectos de cooperación técnica auspiciados por organismos internacionales, agencias de cooperación, bancos y/u otros Estados Parte y no parte de la Convención, con la finalidad de fortalecer sus capacidades en áreas como infraestructura, prevención de desastres naturales y seguridad, entre otras.

[208] Sin embargo, esta información no permite determinar si tales iniciativas de cooperación han fortalecido las capacidades de San Vicente y las Granadinas para prevenir, detectar, investigar y sancionar prácticas corruptas, teniendo en cuenta además que en su respuesta, el Estado analizado tampoco identifica necesidades específicas de cooperación técnica con respecto a cada uno de los órganos de control superior en términos del literal E de la sección I del cuestionario de la Cuarta Ronda.

[209] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional en la implementación de la recomendación 5.2.1 de la sección 5.2 del capítulo IV de este informe. (Véase recomendación 5.1.2 de la sección 5.1 en el anexo I del presente informe)

Recomendación 5.2.2 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

[210] En su respuesta al cuestionario^{60/}, el Estado analizado no presenta información con relación a la anterior recomendación.

[211] Empero, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Estado analizado se refirió a los esfuerzos de intercambio de cooperación técnica que viene desarrollando la Unidad de Inteligencia Financiera en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, no se denota que estos esfuerzos estén referidos a formas y medios efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, como reza la recomendación.

[212] En este sentido, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la implementación de la recomendación 5.2.2 de la sección 5.2 del capítulo IV de este informe. (Véase recomendación 5.2.2 de la sección 5.2 en el anexo I del presente informe).

59. *Ibíd.*, pp. 38 y 39.

60. *Ibíd.*, pp. 39 y 40.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 6.1 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Designar, mediante los procedimientos establecidos al respecto, a la autoridad o autoridades centrales para los propósitos de la asistencia y la cooperación internacionales previstas en la Convención.

[213] En su respuesta al cuestionario^{61/}, el Estado analizado suministra la siguiente información relacionada con la anterior recomendación, la cual lleva al Comité a concluir que la misma ha sido considerada satisfactoriamente:

[214] “*El Fiscal General (el DPP) es la Autoridad Central encargada de recibir las solicitudes de asistencia mutua en San Vicente y las Granadinas y la autoridad designada de acuerdo con la Ley de Asistencia Mutua (en materia penal) de 1993. Las solicitudes también se canalizan a través del Procurador General.*”

[215] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la recomendación 6.1 formulada en el capítulo IV, sección 6, de este informe.

Recomendación 6.2 sugerida por el Comité que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad o autoridades aludidas en el punto anterior, de acuerdo con las formalidades previstas para ello.

[216] En su respuesta al cuestionario^{62/}, el Estado analizado no presenta información con relación a la anterior recomendación. Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, puso de presente que la notificación a que se refiere la misma, se estará realizando a la brevedad. Por ello, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la misma. (Véase única recomendación de la sección 6 en el anexo I del presente informe).

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendaciones sugeridas por el Comité que requieren atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- 7.1. *Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.*
- 7.2. *Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados,*

61. *Ibíd.*, pp. 40 y 41.

62. *Ibíd.*, pp. 41 y 42.

aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.

- 7.3. *Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

[217] En su respuesta al cuestionario^{63/}, el Estado analizado no presenta información con relación en las anteriores recomendaciones. Sin embargo, con ocasión de la visita *in situ*, puso de presente que las autoridades competentes se encuentran brindando la debida consideración a las mismas para su ulterior y efectiva implementación. No obstante, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a las mismas. (Véase recomendaciones 7.1, 7.2 y 7.3 de la sección 7 del anexo I del presente informe).

63. *Ibíd.*, pp. 42 a 45.

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Fortalecer la implementación de normas sobre conflictos de intereses, al igual que asegurar que las leyes sobre esta materia se apliquen plenamente a todos los funcionarios públicos para hacer posible la eficaz observancia práctica del sistema de ética pública.

Medidas sugeridas

- a) Fortalecer, complementar y actualizar las normas que rigen la conducta de la generalidad de los servidores públicos, incluyendo aquellas disposiciones orientadas a prevenir conflictos de intereses, sin perjuicio de los regímenes dirigidos a sectores particulares que por su especificidad puedan requerir un tratamiento especializado.
- b) Crear o fortalecer los mecanismos que garanticen que no se produzcan nombramientos contrarios al régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigentes dentro de la función pública.
- c) Crear e implementar mecanismos que permitan determinar, en casos concretos, si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de conflicto de intereses y que permita adoptar medidas necesarias a fin de proteger el interés público, tales como la desvinculación del ejercicio de sus funciones, su separación del conocimiento oficial del asunto, renuncia a los intereses particulares en conflicto o la invalidez de las decisiones proferidas por quien se encuentre en tal situación.
- d) Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente en ejercicio de sus funciones, en este último caso durante un periodo razonable.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

Recomendación:

Fortalecer y actualizar los sistemas de control y uso de los recursos dentro de la gestión pública, desarrollando normas susceptibles de aplicación coercitiva a todas las autoridades y funcionarios públicos que establezcan la obligación de preservar y usar adecuadamente los recursos que se les asignen en el desempeño de sus funciones.

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Establecer medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
- b) Adoptar e implementar medidas de protección para los funcionarios públicos que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o represalias de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)

Recomendación:

Considerar adoptar una normativa específica, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas”, que incluya plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada de la declaración de los ingresos, activos y pasivos, por parte de las personas que desempeñen funciones públicas en los cargos que establezca la ley, que incluya, además un régimen sancionatorio para quienes no cumplan con la obligación de presentar dichas declaraciones y las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las mismas, con sujeción al sistema jurídico vigente.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCION)

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas no vigentes y por lo tanto no requieren atención adicional.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos de participación en general

Recomendación:

Considerar adoptar una normativa específica con el objeto de establecer, fortalecer y/o perfeccionar, según corresponda, los mecanismos de participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción

4.2. Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

Fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso a la información.

Medidas sugeridas:

- a) Adoptar, tan pronto como sea posible, las medidas necesarias para la promulgación y plena vigencia de la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003.
- b) Establecer mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003 impone a las autoridades públicas, incluyendo un régimen de sanciones para aquellos servidores que incumplan con dichas obligaciones.
- c) Establecer mecanismos administrativos que permitan impugnar las decisiones tomadas de acuerdo con la Ley de Libertad de Información No. 27 de 2003 por las autoridades públicas.
- d) Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para el acceso a la información pública, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología disponible para tal efecto

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendaciones:

- 4.3.1. Establecer mecanismos de consulta que permitan generar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil opiniones y propuestas a ser tomadas en cuenta para prevenir, detectar, investigar y castigar la corrupción
- 4.3.2. Diseñar e implementar programas para difundir los mecanismos de consulta y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendaciones:

- 4.4.1 Desarrollar, tomando en cuenta su régimen jurídico interno, normas y procedimientos que creen, mantengan y fortalezcan mecanismos para estimular la participación en la gestión pública de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de adopción de políticas y decisiones públicas como parte de los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
- 4.4.2 Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendaciones:

Establecer mecanismos que alienten a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a participar en el seguimiento de la gestión pública y generar opiniones y propuestas para que se tengan en cuenta para la prevención, detección, investigación y castigo de la corrupción.

Medidas sugeridas:

- a) Promover, cuando corresponda, métodos que permitan, faciliten y ayuden a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a desarrollar actividades de seguimiento de la gestión pública y en la prevención de la corrupción.
- b) Diseñar e implementar programas específicos tendientes a dar publicidad a los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando corresponda, capacitar y proporcionar los instrumentos necesarios para la efectiva implementación de esos mecanismos.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

5.1. Asistencia recíproca

Recomendaciones:

- 5.1.1. Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción previstas en la Convención y en otros tratados suscritos por San Vicente y las Granadinas.
- 5.1.2. Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de San Vicente y las Granadinas hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención.

5.2. Cooperación técnica mutua

- 5.2.1. Determinar aquellas áreas específicas en las cuales San Vicente y las Granadinas considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados Parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, el Estado analizado debería determinar y priorizar las solicitudes de cooperación técnica mutua.
- 5.2.2. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad o autoridades centrales de acuerdo con las formalidades previstas para ello.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendaciones:

- 7.1. Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
- 7.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.
- 7.3. Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

ANEXO II

**AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS**

<u>Primer día:</u> Martes, 22 de abril de 2014	
08:30 hrs. – 09:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
09:30 hrs. – 10:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
10:45 hrs. – 13:00 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.
	<u>Temas:</u> <ul style="list-style-type: none">• Cooperación entre el sector privado y los órganos de control superior en la lucha contra la corrupción• Mecanismos de participación de la sociedad civil y el acceso a la información pública: seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda
	<u>Participantes:</u> <ul style="list-style-type: none">- <i>Cámara de la Industria y Comercio de SVG</i> Christine DaSilva, Presidente Andrew Woodroof- <i>Colegio de Abogados de SVG</i> Patina Knights LaTeisha Sandy- <i>Cámara de Agricultura y Nutrición de SVG</i> Lennox Lampkin Joylin Lampkin- <i>Consejo Nacional de la Mujer</i> Anesta Rodney, Presidente Brenda Oliver- Subsecretaria
13:00 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo

14:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Procuraduría General <i>Attorney General's Chambers</i>
14:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p><u>Panel 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participantes:</u> Judith S. Jones Morgan, Procuradora General Cerepha Harper, Abogada de la Corona I Jeneille Lewis, Asistente Jurídico y Administrativo Mr. J-Lany Williams Diana Paris, Secretaria</p>
16:00 hrs. – 18:00 hrs.	<p><u>Panel 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas. <p><u>Participantes:</u> Judith S. Jones Morgan, Procuradora General Cerepha Harper, Abogada de la Corona I Jeneille Lewis, Asistente Jurídico y Administrativo Diana Paris, Secretaria</p>
17:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

Segundo día: Miércoles, 23 de abril de 2014	
8:30 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Fiscalía General <i>Director of Public Prosecutions</i>
08:30 hrs. – 10:30 hrs.	<p>Panel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones. <p><u>Participantes:</u> Colin Williams, Fiscal General Colin John, Vice Fiscal General</p>
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Panel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas. <p><u>Participantes:</u> Colin Williams, Fiscal General Colin John, Vice Fiscal General</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Dirección de Auditoría <i>Director of Audit</i>
14:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación.

	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones.
	<u>Participantes:</u> Dahlia Sealey, Directora de Auditoría Joan Brown, Subdirectora de Auditoría
16:00 hrs. – 17:30 hrs.	<u>Panel 6:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas.
	<u>Participantes:</u> Dahlia Sealey, Directora de Auditoría Joan Brown, Subdirectora de Auditoría
17:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<u>Tercer día: Jueves, 24 de abril de 2014</u>	
8:30 hrs. – 12:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Departamento de las Comisiones de Servicio <i>Service Commissions Department</i>
08:30 hrs. – 10:30 hrs.	<u>Panel 7:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional. • Adopción de decisiones. • Régimen jurídico y administrativo de los recursos humanos y acciones de capacitación. • Normativa interna para el cumplimiento de sus responsabilidades y fortalecimiento institucional. • Difusión de sus objetivos y funciones.
	<u>Participantes:</u> Corinne Gonsalves, Oficial Jefa de Personal Mycle Burke, Director de Capacitación
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<u>Panel 8:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Régimen presupuestario.

	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades y su difusión. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buenas prácticas. <p><u>Participantes:</u> Corinne Gonsalves, Oficial Jefa de Personal Mycle Burke, Director de Capacitación</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 17:00 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Seguimiento de las Recomendaciones de la Primera Ronda
	<p><u>Panel 9:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. • Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. • Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. • Asistencia y cooperación. • Autoridades centrales. • Recomendaciones generales. <p><u>Participantes:</u> Judith S. Jones Morgan, Procuradora General Cerepha Harper, Abogada de la Corona I Jeneille Lewis, Asistente Jurídico y Administrativo Mr. J-Lany Williams Diana Paris, Secretaria</p>
17:00 hrs. – 17:30 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
17:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Hotel Grenadine House</i>	Reunión final entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

**AUTORIDADES DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA
COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MESICIC**

ESTADO ANALIZADO:

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Judith Jones-Morgan

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC
Procuradora General

Jeneille Lewis

Asistente Jurídico y Oficial Administrativa
Procuraduría General

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

PANAMÁ

Antonio M. Lam

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información

SAINT KITTS Y NEVIS

Simone Bullen-Thompson

Experta Alternante ante el Comité de Expertos del MESICIC
Abogada General

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Rodrigo Cortés

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA